

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Unidad Azcapotzalco

MIGUEL ALEMAN Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCION

Proyecto terminal de la licenciatura en Sociología

MARIA ELENA RAMOS RODRIGUEZ

INTRODUCCION

Tras las elecciones presidenciales de julio de 1988, las más polémicas en toda la historia de México, intelectuales, políticos y periodistas iniciaron una discusión sobre los orígenes del sistema político nacional. ¿Acaso Cuauhtémoc Cárdenas pretendía echar por tierra un sistema creado en gran medida por su padre, Lázaro Cárdenas?, se preguntaban algunos. No, contestaban otros, porque el verdadero fundador del sistema político mexicano contemporáneo es Miguel Alemán Valdés, fundador del Partido del Estado en su última versión, es decir del Revolucionario Institucional (PRI).

De esa polémica nació la idea de estudiar el sexenio del Presidente Alemán, en especial la conformación y desarrollo del PRI, pieza clave del sistema político mexicano. Estudiar al PRI y por medio de ello detectar las aportaciones del sexenio de Alemán al sistema político mexicano.

Para la elaboración del presente trabajo se retomó la interpretación del autor Manuel Camacho Solís, en el sentido de que el partido oficial ha sufrido tres reformas fundamentales: la primera en 1938 "que buscó transformar(lo) en un frente popular por medio de la composición sectorial"; la segunda, en 1940, cuando se excluyó de él, por decreto presidencial, el sector militar, y la tercera, que se inicia en 1946, y que coincide con un cambio de siglas (de PRM a PRI) .

Camacho Solís establece esas reformas en base a su "impacto duradero", pues contribuyeron a una importante redistribución del poder al interior del Partido.

Para el autor, las reformas por las que ha atravesado el partido oficial han correspondido a situaciones de crisis, a "designios del grupo gobernante", o bien a una combinación de ambos factores.

El PNR tendría diversas reformas que han buscado adecuarlo a las necesidades del momento. Algunas de estas reformas han resultado de un grado considerable de iniciativa dentro del propio partido; otras --las trascendentes-- han correspondido a necesidades del régimen y designios del grupo gobernante.

Primera reforma: hubo una redistribución del poder de los antiguos caciques a los nuevos jefes de los sectores. El cambio de PNR a PRM fue una gran reforma en tanto que redistribuyó el poder y tuvo un impacto duradero. Segunda reforma: contribuyó a redistribuir el poder de los militares hacia otros grupos y tuvo un impacto duradero.

Tercera reforma: coincide con la creación del PRI. (Camacho Solís, 1978)

Retomando esa interpretación se fijó el objetivo de este trabajo que es el de aportar elementos que nos permitan dilucidar a qué proyecto correspondió la tercera reforma del partido: en qué medida fue la respuesta a una crisis y en qué otra "designio del grupo gobernante".

La presente tesis se ocupará precisamente de ofrecer una interpretación preliminar del proceso de reforma del PRM al PRI como parte del proyecto nacional impulsado por Miguel Alemán Valdes, primero como secretario de Gobernación de Manuel Avila Camacho y posteriormente como Presidente de la República en el período 1946-1952.

Para ubicar al Partido del Estado en una perspectiva histórica, se hace primero en un apartado titulado "Breve Historia, de PNR a PRM", un pequeño resumen de la vida de la organización, desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario en 1929, hasta su transformación en Partido de la Revolución Mexicana en 1938.

Posteriormente, en el primer capítulo, se hace un amplio recuento de los principales hechos políticos y económicos ocurridos durante el sexenio del Presidente Manuel Avila Camacho. Ello, porque coincidimos con todos los autores estudiados, desde Pablo González Casanova, hasta Tzvi Medin, en que durante ese periodo 1940-1946 se sentaron las bases para la transformación del PRM a PRI.

En el tercer y último capítulo se hace un recuento de los hechos inmediatamente anteriores al cambio PRM a PRI, como la Ley Electoral de 1946. Así también se hace un recuento de los hechos que constituyeron la Tercera Reforma del Partido. Finalmente, se plantean las conclusiones. ¿Qué prácticas se inauguraron en este sexenio? ¿Fue un designio de Miguel Alemán la Tercera Reforma? ¿A qué proyecto de nación correspondió?

BREVE HISTORIA DEL PARTIDO

En marzo de 1929 México asiste al nacimiento de una formación política *sui géneris*, difícil de considerar un partido plenamente democrático, pero que tampoco es sencillo de calificar como "partido de Estado" en la lógica stalinista de estas agrupaciones.

Se trata de un experimento iniciado por el general Plutarco Elías Calles que ha demostrado su efectividad por más de sesenta años. Bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR), la novedosa coalición de organizaciones políticas regionales, comandadas por caciques y caudillos, respondió a la necesidad de cohesión de la Familia Revolucionaria, tras el asesinato del general Alvaro Obregón, el último de los grandes líderes del movimiento armado revolucionario iniciado en 1910 y que terminaría por transformar la estructura socioeconómica y política de México.

Hasta antes de la fundación del PNR, existían en el país un sinnúmero de organizaciones políticas locales, encabezadas, en su mayoría, por los caciques regionales o por los generales que combatieron en el movimiento armado. Eran partidos personalizados que sobrevivían unos cuantos años y que, como grupos políticos, no fueron capaces de poner punto final definitivo a la violencia. Lo mismo ocurría con los poquísimos partidos con una cierta presencia a nivel nacional, algunos de ellos creados al amparo de los grandes caudillos revolucionarios.

Al ser asesinado el general Obregón, el último personaje con carisma suficiente para gobernar el país y mantener una cierta dirección entre las facciones revolucionarias triunfantes, la nación se ve inmersa en la antesala de una crisis política que amenazaba la permanencia en el poder del grupo revolucionario encabezado por los generales sonorenses Obregón y Calles.

"La misma circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en la que la nota dominante es la falta de 'caudillos', debe permitirnos, va a permitirnos, orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida

institucional, procurando pasar de una vez por todas de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y de leyes". había proclamado Calles en el mensaje político de su informe de gobierno en 1928, días después de la muerte de Obregón (*Excélsior*, 010928).

La fundación del PNR en 1929 fue, precisamente, una de las formas ideadas por Calles para orientar el país "por rumbos de una verdadera vida institucional" y que México no fuera más "país de un hombre". El problema central en el México de 1929 era el de evitar que crisis como la generada por la muerte de Obregón pusieran en peligro la estabilidad del país frecuentemente.

Al PNR se afiliaron casi todos los partidos políticos con una cierta presencia a nivel nacional --excepto el Laborista, el Comunista y el Nacional Agrarista-- y cientos de partidos locales. En este primer momento "el PNR reconoce de una manera absoluta la autonomía de los partidos de las entidades federativas, en todo aquello que se refiere a cuestiones locales" (Varios, 1991, 25).

Así, en el PNR se integran los "revolucionarios reconocidos" con todo y sus huestes. Los afiliados al PNR pertenecían, de hecho, a dos partidos: al regional y al nacional.

El nuevo partido "adoptó una ideología y una retórica constitucionalista, agrarista y obrerista. Denunció cualquier 'doctrina extraña', aludiendo a los comunistas. Impuso una doctrina moderada con proyectos de reforma agraria, industrialización nacional y educación". (González Casanova, 1990, 113).

Cuando concluye la etapa armada del movimiento revolucionario, la organización política nacional queda basada, fundamentalmente, en el poder de los caudillos regionales y sus grupos y partidos como múltiples unidades de poder. Lograr la cohesión y alianza de estas unidades de poder que en 1929 constituyen la forma de organización política predominante en México es la primera gran virtud del PNR. Lograr disciplinar a estos núcleos y restar su poder para centralizarlo es un proceso que se materializa más claramente en 1933.

A ese proceso coadyuvaban varios factores. Poco tiempo después de su fundación, el PNR contendió en las elecciones presidenciales, postulando como candidato a Pascual Ortiz Rubio.

Su principal opositor era José Vasconcelos, candidato por el Partido Nacional Antirreeleccionista y apoyado por sectores medios que exigían mayor democratización en la vida política. En medio de graves y múltiples acusaciones de fraude electoral y represión contra el movimiento vasconcelista, se proclama el triunfo arrollador, si bien nunca suficientemente nítido, --con más del 90 por ciento de los votos-- de Ortíz Rubio.

Así, con estas elecciones quedó claro que "el Estado recurriría a cualquier medio para mantener el monopolio político y que no estaba dispuesto a permitir una verdadera oposición que le disputara el poder por medios electorales" (López Villafañe, 1986, 161). Cabe mencionar que el órgano partidario con facultades para seleccionar al candidato presidencial del PNR era la Convención Nacional que, respaldada por el Comité Organizador del Partido se atribuyó el derecho de decidir sobre las proposiciones de candidaturas al Ejecutivo que podían hacer las delegaciones penerristas. De esta forma, Calles logró que Ortíz Rubio, su elegido, pudiera imponerse sobre Aarón Sáenz, otro miembro de las filas del PNR visto con mayor simpatía por algunos de sus correligionarios en el nuevo partido.

Para muchos de los demás puestos de elección popular "a pesar del sistema de plebiscitos que existió en el PNR, los caudillos regionales eran quienes imponían a sus representantes, dependiendo de sus respaldos directos --a veces armados-- y de su relación con el centro" (Camacho Solís, 1978).

En este período también se puso énfasis en la importancia de mantener "las instituciones" de la Revolución a cualquier precio, y toda oposición que se considerara atentatoria de ello era reprimida con el uso de la fuerza. Como contraparte, todos los grupos que se proclamaran en acuerdo con el PNR eran absorbidos por éste. A las fuerzas agraristas recién armadas se les prometió la reforma agraria.

En 1933 y sin mayor resistencia desaparecen los partidos integrantes del PNR y se establece la filiación directa.

El 30 de marzo de 1938, se disolvió el PNR. Ya no correspondía a la realidad nacional y de haber continuado tal cual era, la "familia revolucionaria" corría graves riesgos de perder el poder.

Si en 1929 la vida política nacional descansaba, fundamentalmente, en las fuerzas regionales, para principios de la década de los 30 hacen su aparición en la escena nacional, con actos y movilizaciones de protesta sin precedentes desde el fin de la etapa armada del movimiento revolucionario, actores sociales que ponen en jaque al gobierno y, de una manera especial, al partido en el poder. Iniciando con "repartos agrarios de facto" y "huelgas ilegales", obreros y campesinos protestan ante la grave crisis económica, el casi nulo reparto de tierras y la política especialmente represiva de los gobiernos del maxismo hacia los trabajadores.

A pesar de que algunas declaraciones oficiales daban por terminada la reforma agraria, "el país conoció, a través del censo agrícola de 1930, el hecho de que un grupo de 13,444 terratenientes monopolizaban el 83.4 por ciento del total de la tierra en manos de privados; que los ejidatarios, en número de 668 mil, tenían la posesión de tierras que representaban apenas un décimo de la que estaba en manos de los hacendados, y que junto a ellos había 2 332 000 campesinos sin tierras" (Córdova, 1989, 14).

Esas cifras pretenden ofrecer sólo una muestra del olvido en que había caído una de las principales demandas por las que estalló la Revolución armada. Las movilizaciones obreras y campesinas, al margen de las organizaciones del Estado y de cualquier partido político, lograron que empezaran a dividirse las directivas políticas, agrarias, sindicales y militares: "Unas optaron por encabezar el movimiento de las masas y encauzar sus demandas, otras por seguir reprimiéndolas" (González Casanova, 1990, 115).

Ese movimiento de campesinos y obreros --con ideología laborista y socialista, que pugnaban, entre otras cosas, por una mayor intervención del Estado en la economía, reparto agrario amplio y profundo-- terminó siendo abanderado por líderes y organizaciones político militares de base campesina que presionaron para que Lázaro Cárdenas fuera designado candidato presidencial por el PNR.

"Cuando Lázaro Cárdenas fue designado candidato presidencial por el partido del gobierno, pese a su juventud, ya era uno de los divisionarios más importantes del ejército. Su carrera militar había sido hecha, básicamente, en campaña y no en la política; conocía bien al ejército y tenía una posición sólida dentro del mismo. Por lo demás, no era un neófito en política pues había sido gobernador de Michoacán y presidente del PNR. No era miembro del grupo original de jefes revolucionarios. Era más joven y se le veía ya como de una nueva generación. Finalmente, había sido un fiel subordinado de Calles, pero no se podía contar entre los incondicionales del Jefe Máximo. No había atacado a Ortiz Rubio ni compartido las opiniones conservadoras de Calles sobre política agraria, independencia relativa que le ayudó a obtener la candidatura oficial". (Aguilar Camín, 1989, 151).

De acuerdo con Pablo González Casanova, Cárdenas, ya famoso por sus posiciones de avanzada, llegó a la Presidencia de la República "con un proyecto agrario, obrero, nacional y estatal parecido al de las organizaciones obreras, al que sus autores añadieron la meta de una 'educación socialista'". Era el llamado Plan Sexenal (González Casanova, 1990, 116).

Los primeros años de su gobierno, Cárdenas se apoyó en las masas no sólo para borrar del mapa político al grupo callista, sino para decretar la expropiación del petróleo y reiniciar, como nunca, el reparto agrario. Entonces, para 1938 el panorama político había dado un vuelco. Ahora, ya no eran las fuerzas regionales las principales protagonistas de la vida política nacional. Lo eran, con más fuerza, las organizaciones obreras y campesinas.

Como reconocimiento a esa nueva realidad es que el 30 de marzo de 1938 se firmó el Pacto Constitutivo del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en sustitución del PNR. Sus integrantes quedaron organizados en forma de sectores. La Confederación Campesina Mexicana, los Sindicatos Campesinos, y las Ligas de Comunidades Agrarias formaron el "sector campesino". La CTM, la CROM, la CGT, el Sindicato de Mineros y el Sindicato de Electricistas formaron el "sector obrero". Los miembros del Ejército y la Marina --como ciudadanos y no como corporaciones-- formaron el "sector militar".

Los cooperativistas, los artesanos, los industriales, los agricultores y comerciantes en pequeño, los aparceros, los profesionales y los empleados de la agricultura, de la industria y del comercio --mediante afiliación individual-- formaron el "sector popular".

El PRM adoptó el lema: "Por una democracia de los trabajadores". Su Declaración de Principios sostuvo el reconocimiento de la lucha de clases como inherente al régimen capitalista; la lucha por la colectivización de la agricultura; el apoyo a la clase obrera y al derecho a huelga; el combate contra el fascismo; la intervención del Estado en la economía; la implantación de un programa educativo oficial en las escuelas particulares; la no intervención y la autodeterminación de los pueblos como principios reguladores del derecho internacional; la igualdad político-social de la mujer; la libertad para los indígenas; el establecimiento del seguro social; el control de los precios, y el fomento de la construcción de viviendas populares.

"Los principios ideológicos del PRM constituyeron una mezcla del pensamiento neoliberal y social de la revolución mexicana con el socialismo y el marxismo". (González Casanova, 1990, 120).

I. MEXICO, 1945: RETRATO HABLADO

Para fines de 1945 las banderas rojas habían sido arriadas del país. En sólo cinco años México había sufrido una importante transformación política y económica debida, en gran medida, a la política de rectificación implementada por el Presidente Manuel Avila Camacho y su secretario de Gobernación, Miguel Alemán.

Avila Camacho asumió la Presidencia de la República el 1 de diciembre de 1940, en un contexto peligroso para el proyecto nacional defendido por la clase política del Partido de la Revolución Mexicana, y las instituciones nacionales creadas hasta el momento por ésta: existían fuertes tensiones en amplios sectores políticos y sociales ante la posibilidad de que se continuara y profundizara el programa del cardenismo.

Evidencia de estas tensiones lo son, por ejemplo, la fundación en enero de 1940 del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), integrado, precisamente, por un importante y bastante heterogéneo conglomerado social anticardenista. Su candidato presidencial para contender en las elecciones contra el candidato del PRM, era el empresario y jefe de la séptima zona militar (con sede en Monterrey), el general Juan Andrew Almazán.

La candidatura de Almazán captura la imaginación de importantes sectores de la sociedad y es sustentada por "sectores de ferrocarrileros, mineros, tranviarios, electricistas, trabajadores de la industria textil y otros grupos (que) apoyaron a la oposición almazanista y convergieron con el repudio anticardenista impulsado por grupos empresariales y estratos medios" (Paoli Bolio, 1985, 142).

"La fuerza demostrada por el almazanismo tuvo el efecto indudable de moderar los planteamientos populistas del régimen y su partido. Los discursos de Avila Camacho trataron de ganar la buena voluntad de los industriales y de los empresarios en general. Cárdenas mismo

moderó los términos de sus pronunciamientos y declaraciones y reiteró que en México no había un régimen comunista ni su gobierno lo promovía" (Paoli Bolio, 1985, 144).

No menos significativo es el hecho que el Partido Acción Nacional, formación política que con el tiempo habrá de convertirse en principal fuerza opositora del país, se haya fundado en septiembre de 1939, integrando una amplia alianza de grupos opositores al cardenismo entre los que estarían Manuel Gómez Morín, exsubsecretario de Hacienda de Plutarco Elías Calles, junto a Efraín González Luna, representante de importantes sectores del viejo catolicismo social mexicano del occidente de la República, lo mismo que incluso viejos representantes del positivismo en México como Aquiles Elorduy. El PAN, de hecho, suscribió de manera informal la candidatura de Almazán en su debut electoral en 1940.

Esta situación "obligó" a Avila Camacho a presentarse como el "creyente" y "respetuoso del hogar mexicano" candidato del Partido de la Revolución Mexicana.

A cambio, un sector del empresariado moderó su actitud, pero Almazán siguió contando con el importante apoyo de los grupos de la aún en proceso de formación clase media urbana en las violentas elecciones del 7 de julio, marcadas por enfrentamientos entre avilacamachistas y almazanistas que acusaban a los primeros de fraude.

Tras la jornada electoral, los dos bandos se declararon triunfadores y ambos candidatos se proclamaron Presidentes electos. Y aunque el resultado de la votación, según cifras oficiales, favoreció a Avila Camacho con 2 476 641 votos, el 93.89 por ciento del total, y al general Almazán con sólo 151 101, para el 5.72 por ciento, en el imaginario de la opinión pública nacional nunca quedó claro ese triunfo.

Cabe recordar aquí que la Ley Electoral vigente en esos comicios fue la promulgada el 1 de agosto de 1918. Esa ley exigía a los partidos políticos un programa de gobierno y la publicación de un órgano informativo. Requería también que se registraran los candidatos (no los partidos). Prescribía también el voto secreto. Los requisitos que las organizaciones políticas deberían cumplir para participar en las elecciones eran los siguientes:

- 1.- Que hayan sido fundados por una asamblea constitutiva de cien ciudadanos por lo menos.
- 2.- Que la asamblea haya elegido a una junta que dirija los trabajos del partido y que tenga la representación política de éste.
- 3.- Que la misma asamblea haya comprobado un programa político y uno de gobierno.
- 4.- Que la autenticidad de la asamblea constitutiva conste por acta formal.
- 5.- Que no lleve denominación religiosa ni se forme exclusivamente en favor de individuos de determinada raza o creencia.
- 6.- Que la junta directiva publique por lo menos 8 números de un periódico de propaganda durante los dos meses anteriores a las elecciones.
- 7.- Que registre sus candidaturas durante los plazos fijados por la ley, sin perjuicio de modificarlas si lo considera conveniente, dentro de los mismos plazos.
- 8.- Que la junta directiva y las sucursales que de ella dependen, nombren sus representantes en las diversas municipalidades, dentro de los plazos fijados por la ley.

Sin embargo, estas "virtudes", introducidas a la legislación con la que el carrancismo estrenó los procesos de reforma electoral en nuestro país, condicionadas más por la lógica del control de la formación de grupos opositores que por una intención democrática desde la perspectiva clásica del uso de este término, la Ley vigente presentaba graves carencias de orden institucional que no sólo impedían la generación de conflictos, sino que en más de un sentido los alentaban.

Ello porque entre las previsiones consideradas por la Ley, para la instalación de las mesas de votación o casillas bastaba la presencia de "cinco ciudadanos", los primeros en llegar al lugar designado por las autoridades.

Este hecho de orden estrictamente institucional fue uno de los elementos por medio de los cuales se facilitaba la comisión de irregularidades electorales.

De hecho, la maquinaria del Partido de la Revolución Mexicana, no hizo --en este sentido-- mas que administrar a la oposición almazanista de 1940 la misma prescripción dada por el Partido Nacional Revolucionario de Calles a la oposición vasconcelista en el proceso electoral de 1929.

INSTITUCIONALIZACION DE LA REVOLUCION

A pasar de las palabras a los hechos dedicó Avila Camacho los esfuerzos de su administración a lo largo del sexenio, contando para ello con la hábil presencia de su secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdes, hombre que se encontraría precisamente en el corazón de toda la propuesta de reforma y rectificación de la administración 1940-46.

El mismo día que tomó posesión el Presidente decretó la eliminación del sector militar al interior del PRM, hecho que no impidió que militares cercanos al mandatario ocuparan puestos de importancia en el mismo partido.

"En realidad (con ello Avila Camacho) se propuso vencer la última resistencia de los militares, almazanistas y cardenistas, marginar al ejército de la política de partido, y someter en cambio al partido a una disciplina militar" (González Casanova, 1990, 124).

"La exclusión de los militares del Partido de la Revolución Mexicana fue también una reforma estructural, debido a que contribuyó a redistribuir el poder de los militares hacia otros grupos y a que tuvo un impacto duradero. La supeditación completa del ejército la consumó el Presidente Alemán, quien inició la política de debilitamiento institucional --numerosos ascensos rápidos en pago a servicios al grupo gobernante, canonjías, mayor intromisión gubernamental en los mandos-- y la creación de otras fuerzas competitivas como el cuerpo de guardias presidenciales y la policía federal de seguridad que quedó al mando de un coronel del ejército y contó con el apoyo de oficiales del Colegio Militar. El mismo Estado Mayor Presidencial que Avila Camacho había creado en la situación anterior de Guerra se convirtió en una nueva fuerza competitiva frente al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional" (Camacho Solís, 1978).

Ello, además, presentaría uno de los rostros de este complejo período de la vida nacional, marcado por el interés por generar, así fuera de manera formal instituciones democráticas. Esta preocupación por las formas, aún cuando resulta contradictorio con el desprecio observado en la aplicación de las normas, fue importante para la integración de una cierta cultura política que a lo largo del tiempo recurriría de manera más y más frecuente a un discurso formalmente democrático.

No deja de llamar la atención que nuestro "ogro filantrópico", para recuperar la expresión utilizada por Octavio Paz en el ensayo homónimo (Paz, 1985), nunca haya asimilado ni la retórica ni las formas de los gobiernos autoritarios o totalitarios de América del Sur o Europa, respectivamente, así como tampoco los arreglos institucionales propios de éstos (nunca se ha disuelto el Poder Legislativo).

Esta conservación de la retórica y lógica organizacional de las democracias occidentales fue favorecida además por el escenario marcado por el conflicto internacional en curso desde 1939 y hasta 1945.

Los efectos de la II Guerra Mundial, en este sentido, no sólo fueron de orden estrictamente económicos (véase, por ejemplo, Rivero, 1990), sino que se tradujeron en la incorporación de México al grupo de los Aliados, y por ello en la inserción del país en el "mundo libre" de la postguerra, teniendo por ello que pagar el precio del mantenimiento, por lo menos, de una estructura formalmente democrática.

Resulta difícil suponer si en la mentes del binomino Avila Camacho-Alemán, el problema era sólo de mantenimiento de estas estructuras "por conveniencia política" o si en el fondo subyacía un propósito democratizador de largo aliento para el país. Ambas hipótesis, en sí mismas serían objeto de todo un programa de investigación por separado, en última instancia lo que importa destacar es que la rectificación (o traición, si hemos de considerar la tesis de personas

como Rodolfo González Guevara que ve en el alemanismo el inicio de la traición al espíritu de la Revolución que habría de concluir en 1988 con la salida de los miembros de la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional) se dió en términos de la asimilación de un modelo formalmente democrático, que apelaba como fuente de legitimidad no sólo al carisma de sus líderes o caudillos políticos locales o nacional, o a la tradición heredada por la segunda y tercera generación de revolucionarios, sino que se justificaba como partido en el poder por medio del expediente electoral.

La salida de los militares como sector corporativo del Partido de la Revolución Mexicana, así como la transformación de éste en el Partido Revolucionario Institucional, junto con la preservación de las formas democráticas e incluso la adición de otras instituciones como las que contenía la Ley Electoral que Avila Camacho y Alemán habrían de introducir en la vida política nacional en 1946, forman parte de este complejo proceso de transformación del proyecto cardenista.

En esta transformación, la eliminación de los rasgos típicamente populistas del sistema político mexicano, ello se tradujo en una sustracción de poder tanto de las organizaciones obreras como de las campesinas, abriendo en lugar de ello un canal de participación para los "difíciles sectores medios": grupos urbanos, dotados de una visión del mundo radicalmente distinta de aquella de los obreros y campesinos. Para ellos, en 1943 se crea en el interior del PRM, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), principal sector de donde, posteriormente, se reclutaría a los políticos profesionales. Con la fundación de la CNOP, el Presidente logró también formar una base de apoyo propia.

Uno de los campos donde las rectificaciones a la política cardenista fueron más importantes y con serias consecuencias para la futura evolución del país fue el campo de la reforma agraria. En septiembre de 1940, Avila Camacho promulga un código agrario que incorpora los decretos que estableció Cárdenas para dar garantías a la pequeña propiedad agrícola y a la propiedad ganadera.

El 11 de diciembre de 1941, se establece un decreto de parcelamiento de ejidos que no satisfizo a aquellos sectores que querían que se llegara hasta su titulación como propiedad privada; sin embargo, fue un golpe al proyecto de mantener a los ejidos como únicas unidades productivas reconocidas por la legislación de la época.

En cuanto a los ejidos colectivos, oficialmente se declaró que permanecerían en todos aquellos casos donde fuera la forma más adecuada para garantizar la producción; sin embargo, de hecho, tanto por la pérdida de apoyos económicos por parte del gobierno, como por el clima político hostil que no favorecía su desarrollo, los ejidos colectivos empezaron a debilitarse, con frecuencia en medio de fuertes conflictos internos.

El gobierno de Avila Camacho debió enfrentar no pocas formas de coacción tanto para terminar con el ejido como para mantenerlo. A esta forma de tenencia de la tierra se le culpaba de los problemas del déficit de producción en alimentos; al mismo tiempo también surgieron presiones en favor de la implantación del amparo agrario. Esta campaña fue sostenida sobre todo por el Partido Acción Nacional y por la gran prensa.

Incluso, en un debate que no deja de resultar particularmente cercano para las decisiones adoptadas por las administraciones del período 1982-1994, dentro del gobierno surgió una nueva burocracia técnica que no dudó en pedir la rectificación de la política agraria y la Suprema Corte declaró procedente el amparo en materia agraria, cuando vulnerara a la pequeña propiedad inafectable. Sin embargo, el gobierno de Avila Camacho no dio marcha atrás en ninguno de esos puntos, en algo que en la década de los 70, uno de los subsecretarios de Agricultura y Ganadería (Oscar Brauer) de la administración Echeverría, calificó como una forma de propiedad de la tierra organizada "para votar, no para producir".

En efecto, uno de los campos de enfrentamiento lo mismo entre los grupos internos del PRM que entre los partidos de derecha e izquierda fuera de éste, fue el de la implantación del derecho de amparo en caso de afectación de propiedades rurales. Sin embargo, Avila Camacho siguió al respecto una política prudente y la posición oficial durante todo el sexenio fue la de que no procedía el amparo en materia agraria.

Por una parte, como medida para evitar el minifundio, a finales del sexenio se estableció una ley reglamentaria que fijó una superficie mínima legal para la pequeña propiedad y medidas para agruparla. Sin embargo, sólo en un caso concreto llegó a aplicarse.

La política de reparto agrario durante el gobierno de Avila Camacho se caracterizó por la disminución drástica en el número de tierras repartidas y por su mala calidad. Mientras que durante el gobierno de Cárdenas se habían repartido 20 136 932 hectáreas, durante el gobierno de Avila Camacho se distribuyeron 5 970 395 (Nacional Financiera, 1974, 74). También se distinguió por el aumento en la concesión de certificados de inafectabilidad y por la burocratización en los trámites que favorecieron la simulación de fraccionamiento de propiedades y, por lo tanto, el enfrentamiento entre propietarios y solicitantes.

Además del burocratismo, los problemas derivados de la falta de entrega de planos definitivos de las tierras que se repartían llevaron a una situación de enfrentamiento entre los propios campesinos y a su consecuente debilitamiento como grupo de presión. Sin embargo, en diciembre de 1945, como una medida para disminuir el descontento del campo, Avila Camacho establece una ley que condona la deuda a ejidatarios por la tierra recibida.

Con Avila Camacho se inicia una política de apoyo a una agricultura comercial y orientada hacia la exportación. Contrariando el Plan Sexenal que disponía que la población ejidataria excedente se acomodara en las zonas de riego, se establecieron sistemas privados en algunas zonas como el Valle del Yaqui, Purificación de Tamaulipas, y se iniciara la entrega de tierras en zonas de riego a pequeños propietarios, como compensación por expropiación e incluso se comenzó a vender dichas tierras a particulares.

En algunas regiones donde los latifundistas habían sido expropiados, se restablecieron relaciones de subordinación de los ejidatarios en el plano de la producción. Justificándolo como una necesidad de asegurar la producción en un contexto de guerra, en Yucatán se devuelven las máquinas desfibradoras a los ex hacendados. Por otra parte, una ley obligó a todos los ejidos que se encontraban cerca de los ingenios a producir casi exclusivamente caña de azúcar, generalizándose así una medida que tenía carácter excepcional y que había sido tomada por Cárdenas en una coyuntura muy específica: el caso del ingenio de Atencingo.

La reorientación de la agricultura hacia la exportación de productos que tenían demanda a causa de la situación bélica y en perjuicio de la producción de alimentos para el mercado interno, produjo una situación de escasez e inflación. Por otra parte, el crédito hacia el campo se destinó hacia productos de exportación y no a la producción de alimentos, lo que contribuyó al déficit en la producción de estos productos.

Otro aspecto importante de la política agraria es que se establecieron medidas para aumentar el control de las autoridades federales y estatales sobre las organizaciones agrarias. En las reformas a la CNC en 1942, se hizo intervenir a los gobernadores en la elección de representantes ejidales ante las comisiones agrarias mixtas, puesto que debían dar su visto bueno a las ternas que presentaban las ligas de comunidades agrarias. Asimismo, por los cambios al código agrario establecido en 1943, pasó de las autoridades ejidales al presidente de la República la facultad de resolver sobre derechos ejidales. Esta medida incrementó la dependencia de los ejidatarios con respecto del Ejecutivo.

Aquí puede advertirse una significativa contradicción entre los propósitos de formalización democrática del sistema político mexicano y el mantenimiento, incluso en los estatutos de los ejidos y la legislación de la época, de fórmulas de control clientelar de la demanda de estos actores sociales, contradicción que --por lo demás-- estará presente también en la relación en el interior del sector obrero del PRI, y que se mantendrá virtualmente intocada hasta las reformas al artículo 27 de la Constitución de 1991-92.

La CNC no presentó oposición a las modificaciones agrarias. Su principal aporte a la defensa de los ejidatarios es su oposición a que se establezca el derecho de amparo en materia agraria. Además, la CNC pidió sin éxito que se modificara la obligación legal de que todo trámite debía iniciarse ante autoridades locales, porque éstas estaban muchas veces ligadas a los intereses de los grandes terratenientes.

Para contrarrestar la ofensiva de los terratenientes en el campo, que buscaban una rectificación mucho más drástica en la política agraria, el gobierno apoyó en 1946 la fundación de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad Agrícola. Esta Confederación actuó como un grupo de presión para obtener beneficios mediante la entrega de certificados de inafectabilidad, créditos, etcétera, al mismo tiempo que se manifestó favorable al amparo. Sin embargo, se declaró "revolucionaria" y procedió dentro de las reglas establecidas por la política gubernamental.

Aparte de la reforma agraria, uno de los legados cardenistas que más problemas provocó al gobierno, fueron las reformas al artículo tercero, sobre todo entre los sectores medios y la oposición de la derecha. Aunque en la reglamentación del artículo tercero, aprobada el 31 de diciembre de 1940, se expresaba que la educación sería socialista, pero argumentando, sin precisar de manera cabal que se hacía referencia a un socialismo surgido de la Revolución Mexicana, el 15 de diciembre de 1945 se decreta que la educación deberá de ser democrática y nacional y se eliminará lo de socialista. Esa reforma, aprobada "respondiendo a la política de unidad nacional" contó con el apoyo del partido oficial, del Partido Comunista y de dirigentes sindicales como Vicente Lombardo Toledano.

Uno de los cambios importantes en la CTM, en la época de Avila Camacho, fue el relevo de la dirección de Lombardo Toledano por Fidel Velázquez en 1941, quien se presentó como único candidato. A partir de ese relevo, se modificó la composición y la orientación de la central. Ya desde su discurso de toma de posesión, Fidel Velázquez señala ese cambio de orientación, refiriéndose, sin nombrarlos, a los lombardistas y comunistas:

"No permitiremos la creación de fracciones, la creación de partidos dentro de la CTM; la CTM será una sola unidad y sus componentes serán cetemistas ante todo, sujetos a una sola disciplina, a una sola directiva: la que fije el Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México" (Labastida Martín del Campo, 1985, 508).

A pesar del conflicto inherente con la estructura sectorial-corporativa heredada del cardenismo, la CTM y las direcciones obreras de los sindicatos importantes, desempeñaron un papel esencial en la política de unidad nacional de Avila Camacho y en la tregua que éste pidió en el terreno de las reivindicaciones obreras. Esta tregua va a ser justificada tanto por la situación económica como por necesidades de seguridad interna ante la entrada del país en la guerra (véase Rivero, 1990).

Dentro de esta perspectiva, en nombre de la defensa del país se establece un acuerdo entre el gobierno y los líderes obreros en el sentido de mantener una tregua en la lucha de la clase obrera. En ese contexto, Vicente Lombardo Toledano en febrero y Fidel Velázquez en mayo de 1942, se comprometen a renunciar temporalmente al derecho de huelga y a recurrir a la conciliación y al arbitraje presidencial. Este acuerdo se traduce en el pacto obrero y en la Creación del Consejo Obrero Nacional el 11 de junio de 1942.

Incluso en marzo de 1945 se suscribe un pacto obrero-industrial entre la CTM y la Cámara Nacional de Industrias de Transformación (CANACINTRA), para implementar un programa de industrialización.

Al mismo tiempo que el gobierno de Avila Camacho negocia con los sindicatos la tregua en el campo de los conflictos laborales, establece toda una serie de medidas organizativas y legales para aumentar la capacidad arbitral del estado. Al iniciarse el año de 1941, se crea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que sustituye al Departamento Autónomo de Trabajo y se refuerza su organización y atribuciones.

Además, en marzo de 1943 Avila Camacho reforma la Ley Federal del Trabajo, que reglamenta en forma estricta el ejercicio del derecho de huelga, la figura de huelga ilegal y las sanciones para quien viole la norma, y da más peso a las juntas de conciliación que deben intervenir antes de que se haga efectiva la huelga. La CTM apoya las medidas justificando que de esa manera se neutralizaban iniciativas como las de algunos senadores para establecer el arbitraje obligatorio en conflictos laborales.

Aquí nuevamente, la lógica que domina la relación entre este sector del PRM y el gobierno de la República, es la de someter y mantener en niveles susceptibles de control, las demandas hechas por los propios sectores, frente a la necesidad apremiante de industrializar el país.

Por otra parte, a pesar del incremento del empleo y de que hay evidencia de una elevación relativa de los niveles de vida de la clase trabajadora, la inflación y la carestía generaron conflictos. Ante la política de las direcciones sindicales de no recurrir a la huelga y los conflictos intergremiales que los debilitaban, estas direcciones tuvieron que enfrentar las presiones de sus bases y el peligro de ser desbordadas. Para atenuar el descontento, el presidente recurrió a decretos para compensar los salarios insuficientes y arbitrar los conflictos. Sin embargo, la intervención gubernamental en los conflictos y en la elevación de los salarios favoreció sobre todo a los grandes sindicatos; los sindicatos débiles sobre todo los trabajadores no organizados, sufrieron un fuerte deterioro en sus condiciones de vida.

Una de las cartas más importantes del gobierno de Avila Camacho para compensar a la clase obrera de la disciplina que le había impuesto, fue el establecimiento del Seguro Social.

Sin embargo, en 1944 la tardanza en hacerlo operar efectivamente y mientras ya se cobraban las cuotas propiciaron un clima de descontento que causó agitación y motines que alimentados por los líderes desplazados. De hecho, 1944 está marcado por el incremento de huelgas y paros ilegales. En ese contexto, el Consejo Nacional Obrero aparece cada vez más inoperante y las pugnas internas se agudizan y culminan con la expulsión de la CTM.

En un período en que, a pesar del crecimiento económico, se presentó la inflación y la carestía, de hecho el papel de la CTM y de los otros sindicatos, CROM, CGT, COGM, pierde peso en el terreno de las reivindicaciones salariales.

Es el presidente, utilizando sus facultades especiales, quien se convierte en un factor de primera importancia, al tomar medidas para el mejoramiento de los salarios o resolver los conflictos en las épocas de mayor descontento. Como resultado, los sindicatos resultaron debilitados y al final del sexenio se multiplicaron las huelgas y paros, así como las pugnas intergremiales y se presentaron movimientos de descontento en algunos sindicatos importantes, como los ferrocarrileros y petroleros. Buscando consolidar posiciones, la dirección de la CTM actuó al final del sexenio más como grupo de presión que como representante de las bases obreras. Por esta razón, evitó cualquier enfrentamiento con el presidente, a pesar de las presiones internas.

A la debilidad sindical contribuyeron las pugnas entre la CROM y la CTM. Al final del sexenio estos conflictos se manifestaron en torno al pacto obrero-industrial que la primera acordó con la CANACINTRA y respecto de la sucesión presidencial. La dirección de la CTM jugó sus cartas a finales del sexenio como grupo de presión más que como representante de sus agremiados y, buscando mantener una posición predominante dentro de las organizaciones obreras, apoyó la candidatura de Miguel Alemán. En cambio, la CROM, por razones similares, favoreció la precandidatura de Ezequiel Padilla.

Durante el gobierno de Avila Camacho, se presentaron cambios significativos en la relación entre el Estado y los empresarios. Tanto con el propósito de preparar un clima más favorable a la industrialización en el seno de los sectores empresariales donde los comerciantes tenían un peso excesivo en la dirección de las cámaras, como para aumentar la capacidad de maniobra del estado en sus relaciones con estos sectores, Avila Camacho envía al Congreso una ley que separa las cámaras industriales de las de comerciantes. Esa ley es aprobada en agosto de 1941.

Más importante que esto, fue la disposición del gobierno en turno para generar un arreglo institucional capaz de favorecer el desarrollo de la operación fundamental del moderno capitalismo occidental, la del cálculo racional, tal como la define Max Weber (Weber, 1984), lo que apunta también en la lógica de la formalización de las relaciones en el interior del sistema político mexicano, así como en el interior de los sistemas económico y social del país.

En noviembre de 1941 el gobierno de Avila Camacho toma otra medida legal que enoja a los sectores empresariales más fuertes y antiguos, incluyendo a los industriales: la creación de la CANACINTRA. Esta cámara, aunque va a formar parte de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), gozará de una amplia autonomía y de apoyo estatal.

Con su fundación se buscó, sobre todo, crear un espacio para las empresas nuevas, medianas y pequeñas que necesitaban apoyo estatal. A su vez, al Estado le convenía contar con un sector dentro de los empresarios con el que pudiera tener relaciones más estrechas. De hecho, la CANACINTRA nunca llegará a representar realmente a los grupos industriales más importantes.

La firma del pacto obrero-industrial entre la CTM y la CANACINTRA con el beneplácito del estado, en abril de 1945, y el anuncio de un plan de industrialización en agosto de ese mismo año, volvieron a ser motivo de conflicto entre los sectores empresariales.

El plan se centraba en la política de conciliación de clases y unidad nacional y en un programa de industrialización en el cual el estado tendría un papel fundamental y en el que se establecerían condiciones para la participación del capital extranjero. Tanto la CONCANACO como la CONCAMIN, reaccionaron denunciando que se trataba de subordinar la iniciativa privada al estado y que, de hecho, se favorecía a los sindicatos. La COPARMEX, ligada al Grupo Monterrey, llegó más lejos, denunciándolo como proyecto comunista.

A pesar de los incidentes señalados y fuera de las críticas constantes a la burocracia sindical y a la intervención del estado en la economía, en una situación de incremento de utilidades y de disciplina laboral el gobierno de Avila Camacho mejorará notablemente sus relaciones con los grupos empresariales, sobre todo, si las comparamos con las que tuvieron con el gobierno de Cárdenas.

En 1942, la normalización de las relaciones con Estados Unidos abre una nueva etapa en las relaciones de México con ese país. Los nuevos vehículos externos se centraron sobre todo en el establecimiento de una fuerte dependencia respecto de la economía norteamericana, que en la época de la guerra mundial se expresó en el hecho de que más del 90 por ciento del intercambio comercial del país era con Estados Unidos.

Cuando Avila Camacho tomó el gobierno, en 1940, heredó una situación económica dramáticamente diferente a la de su predecesor. Mientras Cárdenas operó en un medio internacional que no era particularmente conducente a una rápida industrialización, la Segunda Guerra Mundial dió un estímulo considerable en esa dirección. Cuando la nueva administración empezó a reconocer las oportunidades que le ofrecía el momento histórico, enfatizó cada vez más la necesidad de industrializar el país.

La guerra creó una nueva demanda externa de exportaciones, así como de mano de obra barata, que fue "exportada" para desarrollar distintos tipos de trabajos en Estados Unidos. El total exportado se duplicó entre 1939 y 1945 (productos textiles, alimentos manufacturados, bebidas, tabaco, sustancias químicas). Para 1945 el 83 por ciento de las exportaciones se dirigían a Estados Unidos y de éstos provenían el 82 por ciento de las importaciones. Ese dato es significativo porque da cuenta de la estrecha dependencia de México con respecto a su vecino del norte, situación que contaría mucho para la definición de la política económica nacional.

Para 1945, "la unidad nacional" era un hecho

II. LOS PASOS DE ALEMAN

A principios de 1945, el escenario político nacional comenzaba a caldearse. ¿Quién sería el candidato del PRM a la Presidencia de la República?

Por lo pronto, en febrero de ese año, quedó descartado Maximino Avila Camacho, ministro hermano del Presidente y una de las más importantes figuras políticas nacionales.

Maximino, quien había expresado su deseo de ocupar la Presidencia de la República, falleció el 18 de febrero de 1945. Era conocido también su odio hacia el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, porque, según el hermano del Presidente, el veracruzano, siendo gobernador de su estado había querido entrometerse en los asuntos del estado de Puebla.

Quedaba descartado así un posible candidato o un fuerte opositor a la candidatura de Alemán.

Por su parte, a comienzos de mayo, el Presidente había expresado que el próximo jefe del Ejecutivo podría ser un civil. Ese hecho no caía extraño a nadie, luego de la eliminación del sector militar del PRM. Y no sólo eso. Como recuerda Luis Medina: "la Revolución Mexicana llevaba 35 años de vida y era evidente que habían cambiado los requisitos para el reclutamiento del personal político y que los civiles reivindicaban una parcela. El político-militar pasaba a un segundo plano y dejaba el lugar, cada vez en mayor medida, al político-civil. (Además) era ya difícil encontrar un militar surgido de las trincheras, con la juventud y con los méritos suficientes para asumir la presidencia" (Medina, 1982, 7 y 8).

A principios de mayo, el día 9, el periódico Excélsior empezó a hacer "futurismo". Publicó los nombres de los que, a su parecer, eran presidenciables: Miguel Alemán, Ezequiel Padilla, secretario de Relaciones Exteriores; Javier Rojo Gómez, jefe del Departamento del Distrito Federal; Gustavo Baz, secretario de Salubridad y Asistencia, y el general Miguel Enríquez Guzmán.

De acuerdo con Tzvi Medin, el secretario de Gobernación "había logrado por la misma naturaleza de su cargo un amplio y detallado conocimiento de los resortes políticos nacionales" y sabía que los gobernadores "tienen realmente una fuerza muy importante en el proceso político" (Medin, 1990, 23).

Como secretario de Gobernación, Alemán, incitó a una reunión de todos los gobernadores de los estados y los territorios, en la que se designó al flamante gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos como presidente del bloque de gobernadores.

Tiempo después, Gonzalo N. Santos -- a quien, en 1943, Alemán posibilitó que su cargo de gobernador se prolongara a seis años en lugar de los cuatro que eran previamente-- reunió al bloque de gobernadores, el cual presidía, y lanzó a Alemán como su precandidato. Hecho esto, los gobernadores entraron en contacto con políticos y altos militares, para "promover" a Alemán (Medin, 1990, 23). Según el autor Luis Medina, "de los 31 gobernadores, 23 eran avilacamachistas y apoyaban la fórmula oficial y ocho eran aún cardenistas" (Medina, 1982, 26).

Según Luis Medina, "las relaciones políticas que había establecido Miguel Alemán desde que fuera designado director de la campaña de Avila Camacho, las había profundizado y consolidado a lo largo de cinco años al frente de la Secretaría de Gobernación; como encargado de todo cuanto tenía matiz político, Alemán, al cumplir con lo dispuesto por el presidente en esta materia, se había beneficiado de los resultados. La guerra, que implicó la suspensión de las garantías y el estado de emergencia, había ampliado las facultades de su Secretaría en una medida hasta entonces desconocida y la disputa entre la izquierda y la derecha, por otra parte, le había colocado al frente de la política de arbitraje político". (Medina, 1982, 23).

Así, los apoyos al secretario de Gobernación provendrían de otras personalidades y grupos clave. Según Alejandro Carrillo, durante algunos años brazo derecho de Vicente Lombardo Toledano, el mismo Lombardo, después de haber hablado con el Presidente Avila Camacho, hizo ir al veracruzano a su casa para informarle que la CTM lo lanzaría como su candidato.

Según el mismo Carrillo, Lombardo se ocupó también de reunir a los representantes de la CTM, CNC, FSTSE y el PC y los unificó tras la candidatura de Alemán. En efecto, las centrales sindicales más fuertes del PRM, además de la CNOP terminaron por hacer pública su adhesión a Alemán.

RAZONES

Lombardo estimaba que la Revolución no podía más tener como únicos objetivos la reforma agraria y la defensa de los derechos de la clase obrera, sino que su objetivo histórico inmediato debía ser el de liquidar las supervivencias semif feudales del pasado y lograr la industrialización mexicana para asegurar la independencia económica y política.

En este sentido, Lombardo Toledano estaba de acuerdo con el plan de industrialización alemanista. Pero intentó dejar en claro que el apoyo de la CTM a Alemán era "condicionado".

Así, en el discurso en el que la CTM expresó su apoyo a la candidatura de Alemán, Lombardo conminó al veracruzano: "Honre usted con su conducta y su palabra, con su pensamiento y con su acción a la revolución de la cual es usted hijo.. contará con el apoyo nuestro, el de las masas populares organizadas que vigilarán el cumplimiento del programa de la revolución, y que estarán con usted para estimularlo en sus actos positivos y también para censurarlo públicamente en sus errores o sus desvíos".

Y más aún: "Usted es un cachorro de Lázaro Cárdenas y de Manuel Avila Camacho..."
(Futuro, 1945, 9)

Esas frases dan cuenta de que Lombardo se veía a sí mismo como una especie de padrino político de Alemán.

PADILLA

Si bien, tres de los mencionados por EXCELSIOR como posibles candidatos por el partido oficial, se conformaron finalmente con la postulación de Alemán, hubo uno que no lo hizo: Ezequiel Padilla.

"Los cinco años anteriores habían significado para México no sólo un giro en su política interna; correlativamente, su política exterior había cambiado profundamente, tanto, que México por primera vez en su historia se encontró haciendo causa común con Estados Unidos en una guerra extracontinental". (Medina, 1982, 44).

Y en esos años, el manejo de la política exterior, en especial de la relación México-Estados Unidos, recayó en buena parte sobre la figura de Padilla, secretario de Relaciones Exteriores, quien, en ese lapso logró atraer grandes simpatías por parte de círculos financieros y políticos estadounidenses.

Tanto, que a inicios de enero de 1945, el secretario de Estado norteamericano envió una carta al Presidente Avila Camacho recomendándole a Padilla como futuro Presidente.

Pero, revisando lo escrito anteriormente nos damos cuenta de lo difícil que era que Padilla fuera designado candidato presidencial por el PRM. Pues, si bien, el secretario de Relaciones Exteriores era una especie de correa para mantener la nueva política externa hacia Estados Unidos, país del que iba siendo claro que era fundamental para apoyar la economía mexicana, Miguel Alemán era el garante de que no sólo se continuaría, sino que se profundizaría la política de rectificación, pues en muy buena parte era él el responsable de ésta. Y si era por el apoyo de Estados Unidos, el 29 de marzo de 1946, el mismo Miguel Alemán se apresuró a dejar bien claro que no habría comunistas en su gobierno, ni amigos de Lombardo Toledano, y que la ayuda para industrializar a México la buscarían en Estados Unidos y no en Gran Bretaña o Rusia" (Medina, 1982, 83).

Pero Ezequiel Padilla no leyó los signos del tiempo y el 3 de septiembre de 1945, lanzó su candidatura a la presidencia (Excélsior, 4 de septiembre). El partido de Padilla era el Partido Democrático Mexicano (PDM), creado el 23 de noviembre.

El programa de gobierno presentado por Padilla era de corte liberal capitalista y no se diferenciaba del de Miguel Alemán en el sentido de que postulaba que la expansión económica debería fundarse en la industrialización y en el estímulo y la seguridad otorgados a la iniciativa privada.

En la contienda electoral participaron además los generales Enrique Calderón y Agustín Castro. Calderón fue postulado por el Partido Reivindicador Popular Revolucionario (PRPR). Castro fue apoyado por el Partido Nacional Constitucionalista (PNC). Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN), le ofreció la candidatura a Luis Cabrera, con la idea de que este personaje, quien fuera acre crítico del callismo y del cardenismo aglutinaría a un buen número de ciudadanos, pero éste declinó.

El 7 de julio de 1946 se celebraron finalmente las elecciones, en las que participaron también, gracias a una concesión especial del Presidente, el Partido Comunista y el sinarquista Partido Fuerza Popular (PFP). Cabe recordar que fue precisamente en esos comicios en que empezó a funcionar la Nueva Ley Electoral, de la que se hablará más adelante.

Los resultados fueron los siguientes: Alemán logró el 77.90 por ciento de los votos; Padilla, el 19.33 por ciento; Castro, el 1.2 por ciento, y Calderón el 1.48 por ciento.

Para el autor Luis Medina, Miguel Alemán Valdés "sobresale en la historia política mexicana contemporánea por ser el primer Presidente que propone un proyecto nacional claro y completo", con dos propósitos fundamentales: "llevar adelante tanto la democratización política como el crecimiento económico acelerado". (Medina, 1982, 1).

Según Tzvi Medin, otro estudioso del alemanismo, el candidato Alemán Valdés no "propone" ni define su proyecto de gobierno a partir de las 21 mesas redondas que el candidato

realizó por todo el país, a manera de consultas populares, entre el 27 de agosto de 1945 y el 17 de junio de 1946 y a las que se invitó a "ejidatarios, pequeños propietarios, ganaderos, pescadores, mineros, industriales, obreros, comerciantes y banqueros, 'sin distinción de credo religioso, ideología social o partido político a que pertenecieran'". (Medin, 1990, 30)

Es más, Manuel Germán Parra, director de una de esas mesas redondas --consigna Medin -- señaló que "previamente a (esas) reuniones, se hablaba personalmente con cada uno de los representantes y entre otras explicaciones se les exponía el ideario y el programa de gobierno" (Medin, 1990, 30).

Como titular de Gobernación de Avila Camacho, en medio de una guerra que implicó la suspensión de las garantías y el Estado de Emergencia, "ampliando las facultades de (esa) secretaría en una medida hasta antes desconocida" (Medina, 1982, 23), me parece que Alemán no sólo llegó a la Presidencia con un "proyecto nacional claro y completo", sino que ese proyecto fue ya parte importante de la política de rectificación avilacamachista; un proyecto que Alemán sólo consolidará después como Presidente de la República en el período 1946-1952.

Es más, de acuerdo con Luis Medina: "Alemán había llegado al gabinete con el compromiso explícito de Avila Camacho de dejarle a la secretaría de Gobernación todo el control político interno". (Medina, 1982, 16).

PROGRAMA ECONOMICO

El 30 de septiembre de 1945, se había publicado ya el Programa de Gobierno en el que Alemán expresaba que "el Estado debe brindar la más amplia libertad para las inversiones particulares, reconociendo que el desarrollo económico general es campo primordialmente de la iniciativa privada", y que sólo "aquellas empresas indispensables para la economía nacional a las que no atienda la iniciativa privada serán fomentadas por el Estado". (Medin, 1990, 32).

El Programa de Gobierno también señalaba que el Estado debía garantizar la libertad de los empresarios para abrir centros de producción y multiplicar las industrias del país, "seguros de que sus inversiones estarán a salvo de las contingencias de la injusticia" (Medin, 1990, 32).

Con esas palabras Alemán enviaba una señal a la clase empresarial: sería harto difícil que el gobierno realizara nuevas expropiaciones y haría su mayor esfuerzo por que reinara la "paz social" que diera seguridad al desarrollo económico, o sea -- según una interpretación de Tzvi Medin-- "que se sabría controlar a los sindicatos obreros" (Medin, 1990, 32).

En su discurso de toma del poder, Alemán enviaba una señal más clara al referirse a la industria petrolera y a los ferrocarriles:

"Su manejo debe estar sujeto a un criterio más comercial que político. Los trabajadores con su leal cooperación harán que la reorganización que en estos ramos debe llevarse a cabo sea eficiente. Al mismo tiempo que se mejoran las condiciones del obrero aumentará su responsabilidad. Los trabajadores gozan de la protección del Estado para que se les haga justicia. Nuestra actitud en este sentido será invariable: pero mantendremos los intereses del país por encima de los intereses particulares o de grupos(..) No deben realizarse paros ilícitos" (Medin, 1990, 33).

También en su discurso de toma del poder, Alemán se refería al renglón agropecuario. Prometía el incremento de la producción y la protección y garantía a la pequeña propiedad, a la propiedad ganadera y al ejido por igual. En el mismo discurso, Alemán trataba al espinoso tema de la inversión extranjera, con una escueta, pero prometedora frase: "El capital extranjero que venga a vincularse con los destinos de México debe gozar libremente de sus utilidades legítimas" (Medin, 1990, 34).

Si bien, como comenta Tzvi Medin "la economía mixta (privada, cooperativa, colectiva, estatal) había sido, dentro de un capitalismo predominante, lo característico también de los regímenes previos al de Alemán. Lo que cambiaba o podía cambiar era el grado de preferencia que se otorgara a tal o cual elemento dentro de la economía nacional.

Durante el periodo de Cárdenas fue evidente el apoyo masivo a los ejidos colectivos en el campo y asimismo el apoyo a los obreros y a la nacionalización de empresas fundamentales para la economía nacional, como el petróleo". Con Alemán, iba siendo claro que la iniciativa privada era vista como el pivote del desarrollo económico. (Medin, 1990, 34).

Hasta aquí una relación del proyecto económico que, como se verá más adelante, se logró realizar ampliamente.

PROGRAMA POLITICO

En su Programa de Gobierno, Alemán afirmaba que los principios de la Revolución Mexicana se concretan en la Constitución Política, cuya esencia es la democracia. De aquí que "la victoria de las democracias del mundo, la sentimos y la celebramos los mexicanos como el triunfo de nuestra propia doctrina" (Medin, 1990, 34).

Así, Alemán ponía énfasis en la democracia formal. Hablaba de la posibilidad de un juego democrático real por parte de diferentes partidos políticos. Se comprometía a fomentar el ejercicio de los derechos políticos y a insistir en el acatamiento estricto de la voluntad popular manifestada por medio del sufragio. Concebía como medios para instaurar ese ejercicio verdadero de los derechos políticos, la defensa y el fortalecimiento de las libertades de pensamiento, de prensa, de creencias y de crítica al gobierno, así como dar libertad, garantía y nobleza al municipio.

Hasta aquí el programa político del veracruzano tal cual él lo expresó. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la presente tesis se verá, a partir de hechos políticos significativos de su gobierno, qué tanto se cumplió este programa.

III. LA TERCERA REFORMA

Pero para el seguimiento de sus programas político y económico, Miguel Alemán había actuado ya en dos frentes fundamentales: el partido del Estado y la legislación electoral.

De hecho, la modificación de la vetusta Ley Electoral de 1918, sentó las bases para la reorganización del partido del Estado.

Ley de 1946

En el primer capítulo de este texto se mencionan serios problemas propiciados por lo elemental e insuficiente de la añeja Ley Electoral de 1918. Además de que la "rudimentariedad" de la Ley, propiciaba el fraude, sobre todo a niveles regionales, como se señaló en el capítulo mencionado, de 1918 a 1945, el país se había transformado de forma amplia social y políticamente. No sólo había aumentado el número de habitantes, sino que este país empezaba a pasar ya de ser eminentemente rural, a urbano.

Para 1945 había aproximadamente 22 millones de habitantes en el país, seis millones más que en 1930 y 8 más que en 1921 (Florescano, 1988, 33).

Además, "durante los primeros 20 años posrevolucionarios se agudizó la concentración industrial y poblacional en varias localidades. La ciudad de México llegó en 1940 a la cifra de 1.4 millones de habitantes. Es decir, concentró en sus límites al 7.1 por ciento de la población nacional, que entonces era de 19.6 millones de personas. Guadalajara continuó siendo la segunda ciudad más poblada con 240 721 habitantes. Monterrey, la ciudad industrial que más creció durante el periodo, llegó a tener 190 128 habitantes" (Florescano, 1988, 162).

La situación internacional también favorecía el cambio: México tenía que ponerse a tono, a la altura de los tiempos, en momentos en que la tendencia mundial era el aplauso hacia las victoriosas democracias.

Y ya, "hacia fines de 1945, todos los grupos de oposición presionaban indirectamente para que se reformara la Ley Electoral, pues tanto el PDM como el PAN y la Federación de Partidos del Pueblo insistían en que sería imposible la democracia en México si no se tomaban serias medidas contra el fraude electoral, la imposición, la intervención ilegal de autoridades en el proceso electoral, y no se diera intervención a los partidos en todos los actos del proceso. También querían un sistema que otorgara garantías a los partidos e hiciera valer la efectividad del sufragio", (Medina, 1982, 65). El mismo Avila Camacho no podía hablar de democracia y terminar su periodo constitucional con unas elecciones como las de 1940 (recordar el almazanismo, desarrollado en el primer capítulo).

Y si Miguel Alemán apostaba en su programa de gobierno por la democracia formal, con un juego democrático real por parte de diferentes partidos políticos y ponía especial énfasis en la importancia del sufragio era obvio que le interesaba reformar dicha Ley.

Los efímeros partidos electorales como el vasconcelista, el almazanista o el de Padilla, se formaban con la expresa intención de competir y lograr tomar realmente el poder político, y por ello siempre, al cabo de la derrota a manos del partido oficial, se consideraba la posibilidad de sobreponerse a la usurpación por medio de la violencia.

Es así que la institucionalización de la oposición política era básica en la concepción del proyecto democrático alemanista. Ella debería proporcionar la estabilidad política en el marco de una estructura democrática formal. Con la Ley de 1946 prácticamente se logró ello.

En diciembre de 1945, el Presidente Avila Camacho envió al Congreso el proyecto para reformar la Ley Electoral de 1918. Aprobada por éste el 7 de enero de 1946, el grado de complejidad de esta ley es notablemente mayor que el de la anterior y, por primera vez, se exige registro a los partidos nacionales para que puedan participar en las elecciones.

La nueva Ley reconocía como partidos políticos a las organizaciones que cumplieran con los siguientes requisitos:

1.- Contar con un número de miembros no menor de 30 mil en la República, siempre que, por lo menos, en dos terceras partes de las entidades federativas se organice legalmente con por lo menos mil ciudadanos en cada una;

2.- Obligarse a normar su actuación pública por la constitución federal y a respetar las instituciones que ella establece;

3.- Hacer constar en su acta constitutiva la prohibición de aceptar pactos o acuerdos que los subordinen a una organización internacional, o depender o afiliarse a partidos políticos extranjeros;

4.- Adoptar una denominación propia y distinta, acorde con sus fines y programa político, la que no podrá contener alusiones de carácter religioso o racial;

5.- Organizarse conforme a las bases que establece la ley;

6.- Obligarse a encauzar su acción por medios pacíficos, y

7.- Formular una declaración de principios y un programa político que contenga las finalidades y el señalamiento expreso de los medios que pretenden adoptar en su actividad gubernamental para resolver los problemas nacionales.

De acuerdo con Francisco José Paoli Bolio, además de que en materia de partidos políticos, la disposición establece procedimientos muy difíciles de llenar --rasgo que se repetirá en todas las leyes posteriores--, tiene un doble propósito: propiciar el surgimiento de organizaciones más estructuradas o menos espontáneas que las que aparecieron en etapas anteriores, así como controlar desde su nacimiento, cualquier organización política de carácter nacional, para no tener que aceptar organizaciones cuyas características y potencial se desconociera, tal como ocurrió con las experiencias del vasconcelismo y del almazanismo" (Paoli Bolio, 1985, 146).

La Ley de 1946 obligaba asimismo a los partidos a que en sus estatutos introdujeran un sistema de elección interna para designar candidatos, un programa y un método de educación política de sus miembros y un sistema de sanciones para aquellos de sus integrantes que violaran los principios morales o políticos del partido. Todos estos elementos se conservan en las leyes posteriores.

Los órganos primordiales de los partidos, según lo establecido, deberían ser: una asamblea nacional, un comité ejecutivo nacional con la representación del partido en todo el país y comités directivos en cada entidad federativa en donde hubiera organización partidaria.

Por medio de esos elementos se "exigen organismos y relaciones partidarias no previstos antes, que empujan a la obtención de un grado mayor de cohesión y de permanencia. Por otro lado, facultan a las autoridades para intervenir en la vida interna de los partidos. Estas facultades se han usado poco, pero están en la ley a partir de entonces como un elemento más en manos del sistema" (Paoli Bolio, 1985, 147).

El registro partidario que otorga a los partidos políticos personalidad jurídica debía ser aprobado por la Secretaría de Gobernación. Esta es una innovación que establece uno de los principales mecanismos de control.

Para la obtención del certificado de registro, los partidos deberían efectuar asambleas constitutivas en las dos terceras partes de los estados de la República, verificadas ante notario público, así como protocolizar ante este último la declaración de principios, el programa y los estatutos debidamente aprobados en las asambleas estatales y en la general. Esta era una dificultad grave para conseguir el registro.

Los partidos registrados quedaban obligados a sostener una publicación periódica propia, por lo menos mensual, así como oficinas permanentes, debiendo probar ante la Secretaría de Gobernación, por lo menos cada seis meses, el cumplimiento de esos requisitos. Los partidos que no cumplieran con estas disposiciones podían quedar sin registro.

Por último, en los comicios electorales sólo podían participar los partidos registrados con un año de anticipación a la celebración de los comicios".

Por todo ello, "la Ley de 1946 dio al régimen suficientes elementos para intervenir a tiempo en los procesos políticos, para frenar, desestimular o de plano impedir ciertas candidaturas independientes. En adelante, no habría que esperar a las elecciones para contrarrestar fuerzas políticas contrarias al gobierno. La intervención de éste en la vida de los partidos, la anticipación para que éstos pusieran todas sus cartas sobre la mesa, daban una ventaja al gobierno, muy superior a la que tuvo en procesos electorales anteriores, con un fruto mucho más apetecido: mayor legitimidad", apunta Paoli Bolio (Paoli Bolio, 1985, 147).

Mayor legitimidad y sobre todo estabilidad. "La Ley de 1946 estableció el patrón legislativo y la estructura de todas las disposiciones en materia electoral hasta la Ley de 1973, que queda en vigor hasta fines de 1977". Rigió así la historia político-electoral de casi tres décadas, contribuyendo en gran medida a que en ese lapso se incrementara la estabilidad y se redujeran "los conflictos electorales nacionales graves, con la sola excepción del movimiento henriquista (1952) (Paoli Bolio, 1985, 147).

En este sentido, el autor Juan Molinar Horcasitas, apunta: aunque "los elementos restrictivos y centralizadores de la Ley de 1946 se fueron modificando a lo largo del periodo 1946-1987 (aumentándose o reduciéndose según las necesidades), casi todos los analistas de las elecciones mexicanas coinciden en señalar el año de 1946 como el inicio de la fase moderna, o contemporánea, del sistema electoral mexicano" (Molinar Horcasitas, 1991, 24).

Señala así que "dos grandes diferencias separan los marcos normativos de las elecciones antes y después de 1946: el grado de centralización en los procesos de organización y vigilancia de los comicios y el tipo de partidos que a ellos podrían concurrir" (Molinar Horcasitas, 1991, 25).

- Por lo que hace a la oposición, la aprobación de la Ley Electoral de 1946, fue objeto de protestas, por parte del Partido Acción Nacional. El hecho de que la Ley pusiera fin a las facultades electorales de las autoridades locales, molestó mucho al PAN, que se veía debilitado en su lucha por el control de los municipios.

Pero la aprobación de la Ley, no sólo irritó al PAN, sino a la misma CTM, que no comulgaba con la idea de excluir a los alcaldes municipales del proceso electoral, toda vez que éstos eran en gran número cetemistas. Así, la nueva Ley venía a debilitar también la fuerza política de la central obrera.

El autor Tzvi Medin, es más radical al hablar sobre la Ley de 1946. Para él, esta Ley y su contribución a la institucionalización de la oposición política, favoreció que los partidos políticos de oposición renunciaran, explícita o implícitamente, a la contienda por el poder real.

"La institucionalización de los partidos políticos de oposición implica la creación de intereses permanentes organizados y concentrados en un partido político, y susceptibles a la manipulación presidencial. Se trata de la existencia de instituciones políticas, públicas, visibles, con intereses presentes y futuros, controlables, manipulables por medio de 'premios', cohecho, amenazas y toda la gama de posibilidades de acción del poder político al respecto. Esta institucionalización contribuye a la estabilidad y a la perpetuación del sistema por medio de la legitimación popular democrática que surge de su participación simbólica en el proceso electoral, y asimismo por restar sentido a la alternativa violenta contra el sistema. A cambio de la participación y de algunos logros simbólicos (municipios, diputados, senadores), la oposición política debe aceptar las reglas del juego del sistema imperante, lo que implica en último término su renuncia a constituirse en una alternativa real al poder político vigente". (Medin, 1990, 68).

DE PRM A PRI: PRIMER TIEMPO

"Pero ha llegado el momento de que pongamos atención al hecho (sorprendente para el que lo observa con los anteojos de los ochenta) de que el único que no se había pronunciado (por Miguel Alemán) era el mismo PRM, y ello hablaba por cien testigos de su debilidad política. El PRM se encontraba debilitado a tal grado que no sólo no se había pronunciado por la cuestión de los presidenciables sino que tampoco lo haría, ni tampoco sería el que dirigiera la campaña electoral de Alemán, que comenzó de inmediato. Alemán sería postulado por el Partido sólo seis meses después de su postulación por la CTM, pero no por el PRM, que desaparecería, sino por el PRI" (Medín, 1990, 29).

En efecto, el cambio de proyecto histórico, ideológico y estructural sucedido durante el sexenio del Presidente Manuel Avila Camacho --desarrollado en esta tesis anteriormente-- afectó al partido de Estado. El viraje del Estado repercutió de inmediato en el Partido y sus organizaciones. Como se recordará, con el Presidente Avila Camacho sucedieron cambios cruciales que afectaron la vida del Partido, como la desaparición del sector militar, la creación de la CNOP y la entrada a la CNC de los pequeños propietarios.

Precisamente, como se apuntó anteriormente en este trabajo, la desaparición del sector militar, es marcada por Manuel Camacho Solís como la Segunda Reforma del partido.

Con Avila Camacho, el Estado pasó oficialmente del proyecto socialista a un proyecto democrático. Pasó del 'Frente Popular a la 'Unidad Nacional', y de la tolerancia religiosa a un liberalismo y una tolerancia más abiertas. "En economía el gobierno no fue liberal. Fue partidario de la intervención del Estado, aunque preconizó "la cooperación del Estado con el sector capitalista". En política exterior y petróleo no fue antimperialista, fue nacionalista, exigente de reconocimiento a una clase gobernante dispuesta a negociar. En el terreno agrario frenó la fiebre de reparto de tierras del cardenismo, aunque no acabó con él.

En el terreno obrero aplicó una política de contención de huelgas y salarios , y se dedicó a restarle fuerza a las organizaciones obreras que venían con grandes experiencias de lucha y que presentaban obstáculos al "nuevo curso" de la Revolución Mexicana. Para todo, el presidente contó con facultades excepcionales que le otorgó el Congreso, en vista de que el país se hallaba en guerra contra el Eje.

Con todo ello, según la interpretación de Pablo González Casanova, "el Partido empezó a perder fuerza, o presencia propia. También empezaron a perder fuerza los sectores. El Partido perdió fuerza en el gobierno; los sectores, en el Partido. El PRM perdió fuerza ideológica, no sólo por el empantanamiento de sus doctrinas anteriores y la búsqueda aún insegura de otras nuevas, sino porque el gobierno acordó que el periódico del partido (El Nacional) pasara a depender de la Secretaría de Gobernación. Y le quitó la radio-transmisora. Los sectores perdieron fuerza frente a los mandos jerárquicos y los funcionarios. Dentro de los sectores perdió fuerza sobre todo el Sector Obrero" (González Casanova, 1990, 124).

PRI

Fue así que se inició la Tercera Reforma del Partido.

En sólo dos días todo cambió. El 18 de enero de 1946 se reunió una Convención del PRM en la que desapareció aquél, y se fundó el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ese día la Convención aprobó la declaración de principios, el Programa de Acción y los Estatutos. Al día siguiente, el 19, la Convención eligió a Miguel Alemán Valdés como candidato del flamante PRI a la Presidencia de la República.

El PRI abandonó el lema "Por una Democracia de Trabajadores" y adoptó, en cambio, la consigna "Democracia y Justicia Social". El partido emergente pasó de preconizar la preparación del pueblo para el socialismo a proponer educarlo "para una democracia auténtica".

Borró la defensa de la "educación socialista" en favor de una "educación avanzada y nacionalista". Ya no se habló de "Pacto" de obreros, campesinos, ejército, sectores populares, como base del partido. Se habló de una "asociación política de ciudadanos".

Las transformaciones estructurales resultaron también significativas y profundas. Todas tendieron a concentrar el poder en los funcionarios del partido, en su Comité Central y en la cabeza de éste. De acuerdo con los nuevos estatutos disminuyeron una a una las facultades de las asambleas y las bases. Fueron anulados los "sectores" y sustituidos por delegaciones de los estados. En cuanto al Comité Central en vez de "delegados" se integró con "secretarios". En lugar de los cuatro delegados de los antiguos sectores hubo siete secretarios con varias funciones. Entre los secretarios se incluyó al obrero como uno entre muchos. Perdió el peso que antes tenía en el voto de cuatro, y como representación de organizaciones y directivas. Los obreros dejaron de tener representación proporcional en todos los niveles y cargos. Se les privó del derecho a elegir a los candidatos de partido en sus lugares de trabajo.

Al "sector" se opuso el "distrito". También "el individuo". Al obrero se le mezcló con otras clases y sectores.

"No se trataba de omisiones o cambios insignificantes o meramente terminológicos, sino del abandono definitivo de toda tendencia izquierdista y de la neutralización de cualquier aspiración a una alternativa cualitativa al régimen imperante. Pero, a pesar de todo, en enero de 1946 la campaña electoral aún estaba por delante, y en el artículo 6 de los principios del PRI aún encontramos el tenue reconocimiento de la existencia de la lucha de clases. Mas durante el sexenio también ello desaparecería en la nueva declaración de principios del PRI, en febrero de 1950. (Medín, 1990, 37).

En sólo dos días todo cambió, pero a lo largo del sexenio de Miguel Alemán se fueron "profundizando" estos cambios. Bajo la Presidencia de Miguel Alemán, el Estado adquirió un aire distinto. En forma tenaz y agresiva se dedicó a crear las condiciones favorables del "desarrollo estabilizador" que privaría en México durante varias décadas.

El 5 de diciembre de 1946, el Congreso aprobó una reforma al artículo 27 Constitucional propuesta por el Presidente Alemán. Por ella concedió el derecho de amparo a los dueños de la tierra, y amplió el tamaño legal de la "pequeña propiedad". Fue el inicio de toda una política que determinó el auge de la burguesía rural y de las empresas agrícolas.

En el mismo mes de diciembre, los dirigentes del sindicato petrolero fueron arrestados. Se les acusó de haber incendiado la refinería de Azcapotzalco, y de "traidores a la Patria".

Dos días antes de que terminara el año, el Congreso reformó el artículo tercero de la Constitución. Después de doce años la educación dejó de ser socialista.

En diciembre ya habían entrado algunos empresarios al gabinete. En enero entraron al PRI.

Posteriormente, el gobierno aplicó un llamado "delito de disolución social" --que se había configurado ambigualmente durante la guerra, con el supuesto de que serviría para defenderse de los nazis-- contra todos los líderes independientes, opositores a los designios del gobierno. Los inculpados podían ser juzgados por sus ideas e intenciones.

Se acusó a los líderes de tener ideas comunistas y de preparar subversiones comunistas. Eran tiempos de "Guerra Fría". El Congreso dobló la pena máxima del delito de "disolución social" a doce años de cárcel. Muchos líderes fueron privados de su libertad no sólo acusados por ese delito, sino por otros que permitían acumular sanciones de por vida.

Los líderes independientes (en particular los lombardistas y comunistas) fueron derrotados en la CTM. Lombardo fue expulsado de la CTM. Los líderes ferrocarrileros (y el PCM) trataron de formar una nueva central (la CUT). El sindicato de ferrocarrileros fue ocupado por las fuerzas armadas, y se instaló una dirección sindical espuria, mientras los líderes iban a la cárcel. El gobierno no se limitó a hacer escarmiento en los líderes. Persiguió a los ferrocarrileros acusándolos de delincuentes políticos, de irresponsables y corrompidos. La CUT (Central Unica de Trabajadores) quedó a cargo de algunos líderes que no fueron encarcelados: los presionaron y los llevaron a rendir homenaje al presidente.

Cuando Lombardo todavía era miembro de la CTM trató de formar un nuevo partido. Pidió apoyo a la Central. Esta se lo ofreció para enfrentarlo a los ferrocarrileros. Se lo retiró una vez que aquéllos fueron destruidos. Entonces la CTM, o mejor dicho, sus dirigentes-funcionarios reclamaron la afiliación automática y en masa de las bases obreras y sindicales en el Partido Revolucionario Institucional. Así se logró que al fundar Lombardo el nuevo partido llamado Partido Popular éste se hallara sin bases sindicales. Y como nació sin ideología socialista, se limitó a ser un "instrumento crítico de la Revolución Mexicana" y a luchar por "las metas de la Revolución Mexicana".

Lombardo no se dio por derrotado. En busca de bases obreras para su partido fundó una central, la "Unión General de Obreros y Campesinos de México", que afilió a la Federación Sindical Mundial. El gobierno no la reconoció. No le dio registro legal. Desconoció cualquier gestión sindical de sus miembros. Según hizo ver el propio Lombardo, el gobierno alemanista "prosiguiendo en su labor de control, intervino en las convenciones y asambleas de los sindicatos industriales, empleando el mismo procedimiento que contra el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. Así impuso a las directivas de esas agrupaciones, y las retiró de la UGOCM". Después siguió el ataque a los grandes sindicatos. El de mineros recibió duros golpes. Fue entonces cuando dió inicio una "profundización" de la tercera reforma del PRI.

El 2 de febrero de 1950 se reunió una Convención del Partido que "con un criterio unificado sobre las cuestiones que serían sometidas a su consideración" aprobó los nuevos estatutos, el programa de acción y la declaración de principios que regirían al instituto político. Todos los documentos fueron aprobados en forma unánime por 1066 delegados, tras dos días de labores, en que no hubo el menor "foco de agitación". La esencia de las reformas fue ideológica y estructural. Quedó fuera cualquier viso de nacionalismo. En cambio fueron exaltados, el municipio, la familia, los derechos del hombre y la "Civilización Occidental".

Todo derivó en un programa de acción que impulsara a la libre empresa y ofreciera con ella la solución de los problemas nacionales.

La estructura del PRI se hizo más funcional. Se volvió nuevamente al sistema de los "sectores" como forma adecuada de la división del trabajo político, sobre todo ahora que los sectores ya estaban manejados en sus cúpulas por funcionarios, por líderes-funcionarios y por un sistema de apoyos políticos comprometidos con ellos, ligados a ellos y jerarquizados en ellos.

Según la interpretación de Pablo González Casanova, "el PRI se convirtió desde entonces en un partido de funcionarios representativos, procuradores y conciliadores, en que los jefes principales designan a los jefes menores y éstos representan a aquéllos, de manera personal y burocrática, pero basada también en 'contingentes' de masas representadas (González Casanova, 1990, 129).

Veamos a continuación la interpretación que de estos hechos ofrece Manuel Camacho Solís, para quien la tercera reforma del Partido coincide con la creación del PRI.

"Seis meses antes de las elecciones de 1946, con una predisposición civilista y legalista y con el antecedente de la creación de la CNOP, ocurre una reforma cuyos efectos alcanzan a nuestros días. El cambio en el partido es parte del proyecto original de Miguel Alemán que respondió a sus necesidades electorales y a su visión del país.

"En el terreno doctrinario la reorientación se manifiesta en que se relega la lucha de clases en favor del 'mantenimiento y perfeccionamiento de las instituciones'. Se insiste en la necesidad de moralizar la administración pública. La orientación socialista es sustituida por un apoyo a las democracias muy cercano en el lenguaje al de la guerra fría. Y se sustituye el intervencionismo y la planeación por 'la mayor libertad económica posible'.

En lo que toca a la estructura interna del partido se crea el voto individual para la selección interna de candidatos, que vendría a sustituir a las convenciones de los sectores obrero, campesino y popular. A la vez se crea la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional que quedaría integrado por representantes de las entidades estatales electos por los sectores en los que se debía darse participación a una mujer y un joven, se crean nuevas secretarías en el comité nacional y se atribuyen a los liderazgos de las cámaras las secretarías de acción política (Medina, 1982, 76).

Estos cambios doctrinarios y organizativos fueron parte de un proyecto político bastante claro, que venía a responder a la situación de la posguerra y a las aspiraciones del grupo alemanista. En un clima de recesión económica, de preludio de la guerra fría, de agotamiento de la unidad nacional, se concibió un proyecto de industrialización y desarrollo agrícola como la mejor solución a la crisis. El peso de los sectores en el PRM y la influencia de la izquierda cardenista y comunista en el movimiento obrero y en el campo, obstaculizaban el proyecto. Por ello es muy probable que el nuevo grupo decidiera apoderarse de las principales organizaciones políticas --directa o indirectamente--. Los intentos de encarcelamiento de algunos líderes sindicales en 1947, sin existir razones inmediatas suficientes, parecen demostrar que el grupo del Presidente Alemán tenía un proyecto previo al que incluso le buscaron circunstancias, como ocurrió con el "charrazo" de 1948.

Dentro de este proyecto político era consecuente la sustitución doctrinaria y organizativa que ocurrió en 1946. Sin embargo, la oposición obrera a la que tuvo que enfrentarse el gobierno, que llevó a una considerable disgregación de la CTM, posiblemente convenció al Presidente Alemán de la necesidad de restaurar la designación sectorial de candidatos.

La tercera reforma --de Alemán-- redistribuyó las fuerzas del interior del partido, con la exclusión de las fuerzas sociales que habían ocupado las organizaciones del régimen.

Primero (1946) en contra de los sectores al instaurar la votación individual para la selección de candidatos y luego, cuando los sectores ya habían excluido a la oposición (1950), a favor de los sectores para facilitar su cohesión interna ofreciendo a sus dirigentes la posibilidad de premiar la lealtad y canalizar las ambiciones hacia las posiciones políticas que las candidaturas del PRI garantizaban. El resultado final fue que distribuyó entre todos el poder --debilitando a todos sus integrantes-- en favor de la clase política que terminaría por abandonar el partido para ocupar la cada vez mayor y más benévola administración pública.

El PRI ha sido a través de sus grandes reformas un partido de individuos --políticos tradicionales con fuerza regional o políticos de clase media urbana-- y de organizaciones --de organizaciones sociales del régimen con una autonomía relativa--. Entre ambos se han alternado el poder. Se funda con los caudillos regionales, pero ya para la elección de 1937 es tan poderosa la oposición y definida la orientación del Presidente Cárdenas que ellos tienen que aliarse con la CTM, la CNC y los sindicatos de empleados públicos y maestros. En 1938 los sectores se imponen abrumadoramente sobre los políticos de los estados, pero no pasaría mucho tiempo antes de que los representantes de fuerzas locales se volvieran a imponer en la misma candidatura y elección de Avila Camacho. Avila Camacho diluye el poder de los sectores, pero fue Alemán en 1946 quien se enfrentó directamente a los sectores imponiendo la votación individual para la selección de candidatos; para luego restituir a los sectores depurados su poder. Dentro del proyecto político que definió Miguel Alemán continúa hasta nuestros días una cierta alternancia, aunque con una tendencia definida hacia el mayor peso de las representaciones obreras" (Camacho Solís, 1978).

"En 1950 ya estaba hecho el PRI. Cualquier reforma ulterior sería inesencial. En la práctica sólo funcionarían las reformas que afinaran y ajustaran un sistema que ya no varió en su esencia. Desde entonces no sólo termina la forja del PRI sino la del sistema político mexicano, tal y como funcionaría por lo menos 30 años" (González Casanova, 1990, 129).

Conclusiones

"Cualquier análisis del sistema político contemporáneo de México tiende a centrarse, de manera implícita o explícita, en la explicación de un hecho singular en el contexto latinoamericano: su estabilidad política. En efecto, en 1920 tuvo lugar el último cambio violento de gobierno dentro del régimen que surgió del triunfo de la Revolución mexicana en 1910, y en 1929 se derrotó el último intento serio por romper la continuidad política mediante el uso de la fuerza; es justamente en ese año en que se funda el partido del gobierno, partido que, desde entonces aunque con otros nombres, ha usufructuado el poder de manera ininterrumpida. De ahí arranca la estabilidad política mexicana que ya es casi sesentenaria..."(Meyer, 1989, 305)

Una de las principales características de los estados nacionales modernos es el grado de complejidad que han adquirido en el ejercicio del poder. Basta mirar los problemas que afrontan los estados latinoamericanos en la búsqueda de la estabilidad política y del desarrollo económico para concebir la cantidad de factores que se conjugan en el arte de gobernar. Evidentemente no ha sido suficiente ganar las elecciones o estar al mando de un ejército para conducir una nación en una y otra dirección.

La construcción de un poder sólido requiere, además de la capacidad de ejercer la fuerza y la coerción, de instituciones políticas que regulen las relaciones entre los sectores sociales; y que a su vez sean reconocidos mayoritariamente los mecanismos utilizados para dirimir los problemas del poder. Solo así se construye un Estado hegemónico.

Durante el siglo XX la modernización de las sociedades ha conducido a una creciente complejidad de los mecanismos orientados a lograr el consenso social. En la medida en que las clases sociales crecen en tamaño y organización, y desarrollan alternativas políticas propias, la dinámica de los conflictos políticos en un país se transforma. De ahí la necesidad de los gobernantes de reformar constantemente al Estado en su acción para mantener el poder. Este es el origen de fenómenos políticos como las reformas a las legislaciones electorales, la creciente participación del Estado en la economía o los intentos, a nivel mundial, por controlar los medios masivos de comunicación.

En este sentido, si un Estado debe contener las instituciones y mecanismos políticos para sustentar la hegemonía de las clases gobernantes y dominantes, las primeras deben ser capaces de realizar las transformaciones necesarias en la estructura y el funcionamiento estatales para conservar el poder. La sabiduría del gobernante radica entonces, en detectar los momentos oportunos y los aspectos específicos en los que deben reformarse las bases del poder, además de diseñar las alternativas políticas

convenientes para mantener la orientación de un esquema de gobierno. Una omisión o la falta de visión política en un momento determinado podría conducir, en el mediano o largo plazo, a un debilitamiento creciente e irreversible de la institucionalidad estatal, acercando así el fin de un esquema hegemónico. Este es el problema que se plantea un grupo gobernante cuando piensa en la continuidad del sistema político.

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México logró, con la Revolución, consolidar un Estado que ha conservado su hegemonía y su estructura fundamental, incorporando las reformas necesarias para adecuar el sistema a las nuevas realidades que devinieron con el proceso de modernización.

En términos generales, la continuidad del Estado mexicano contemporáneo se expresa en dos grandes logros: la estabilidad política y el crecimiento económico a partir de 1940. Por estabilidad política entendemos aquí la permanencia de las bases jurídicas que definen las características y funcionamiento formal del Estado mismo. No se trata de negar la existencia de conflictos políticos serios en la historia mexicana. Sin embargo, ninguno de ellos rompió el esquema básico del Estado, ni en sus principios constitucionales ni en su orientación capitalista, sino más bien fueron motivo de posteriores reformas.

Por crecimiento económico entendemos el incremento anual del producto interno bruto. Esto no quiere decir que la economía

mexicana haya vencido las contradicciones de su desarrollo o que se cuenta con la autonomía y salud suficiente para garantizar perennemente la estabilidad, pero sí que ha permitido la permanente incorporación de la población al mercado de trabajo. Los elementos que sustentan la continuidad del Estado mexicano (estabilidad política y crecimiento económico) han sido los resultados de las oportunas reformas que los gobiernos posrevolucionarios incorporan como consecuencia de los conflictos políticos que afrontaron. En aras de la conciliación y de la estabilidad, se acató la lógica que imponía al proceso político el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, esta lógica tuvo como referentes las instituciones y las formas específicas de hacer política que por tener consenso entre la población, garantizaron la continuidad del sistema.

De esta manera, las instituciones y formas específicas de hacer política (factores de la continuidad) que garantizaron la estabilidad en México son: a) el carácter presidencialista del gobierno; b) la presencia política del Partido Revolucionario Institucional y su vinculación con el gobierno; y c) la capacidad conciliadora del Estado a partir de las garantías constitucionales y la defensa de los derechos sociales.

Paralelamente, el crecimiento económico sólo puede ser explicado a partir de uno de los factores más antiguos del Estado en México: su participación en la economía y su capacidad para

dirigirla por los caminos que considere conveniente, garantizando siempre la permanencia de la orientación capitalista.

En la medida en que cada uno de los factores mencionados fue el resultado de la dinámica social en su conjunto, la continuidad en México sólo se entiende a partir de la interrelación operativa de éstos.

Los factores de la estabilidad política en México

A manera de marco de referencia presentamos las características de cada uno de los factores de la continuidad.

a) El presidencialismo. Esta categoría analítica ha sido utilizada de múltiples formas en los diversos análisis políticos. Sin embargo, todos coinciden en la importancia que tiene el Presidente de la República en la vida política del país. Para nadie es un misterio que el poder del Presidente en México rebasa cualitativamente el poder de sus homólogos en otros estados nacionales. En este caso interesa el presidencialismo como factor de la continuidad política del Estado mexicano.

Por principio habría que recordar las múltiples facultades que goza el ciudadano mexicano que ocupa la Presidencia, algunas contenidas en la ley fundamental del país, otras asumidas como resultado de la historia política de México.

En primer lugar, el Presidente de México es el Jefe del Estado mexicano; esto es, el depositario del poder constituido y reconocido por la sociedad mexicana. Por lo tanto, es el representante oficial del país ante el mundo, y el jefe máximo de las instituciones y poderes que conforman la organización política del país.

En segundo lugar, el Presidente de México es el Jefe de Gobierno, esto es, el encargado de diseñar y ejecutar las políticas que conducirán la vida del país. La administración pública en su totalidad está bajo su responsabilidad y son pocos los instrumentos legales o institucionales que podrían vigilar su acción.

Estas dos características del Presidente sintetizan en él la dinámica fundamental de las relaciones políticas de México. Sus órdenes, sugerencias, iniciativas o insinuaciones, adquieren una dimensión incomparable con otros grupos o componentes del aparato de poder. En este sentido, la igualdad de los tres poderes de la Unión y las relaciones entre ellos quedan sometidos a la fuerza del Poder Ejecutivo.

En términos de la continuidad, la centralización del poder en el Presidente de la República facilitó desde los primeros años del México Revolucionario, la estabilidad en los períodos de gobierno y la posibilidad de realizar un proceso continuo en la construcción de un Estado moderno.

Posteriormente, la centralización del poder también operó como unificador del grupo gobernante. Cada sexenio, las altas esferas de la burocracia se transforman completamente en aras de servir al nuevo mandatario.

Otra de las facultades del poder Ejecutivo es la de ser Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. También esta atribución es el resultado del proceso histórico posterior a la Revolución, ya que el ejército triunfante fue el que centralizó el poder y cuando pasó a manos de los civiles, el control de las fuerzas armadas garantizó la lealtad del ejército y evitó posibles golpes de Estado o levantamientos armados. Cuando éstos se presentaron, su derrota fue inmediata. Huelga aclarar el impacto de la sumisión de las Fuerzas Armadas al Presidente en función de la continuidad.

Entre las bases de poder que mantienen la hegemonía de la clase gobernante en el Estado en México, el Partido Oficial desempeña un papel fundamental. No es de extrañar que el Presidente de la República sea el Primer Jefe del Partido Revolucionario Institucional cuando este partido fue fundado desde el poder del Estado. Las consecuencias de este título convierten al partido en un aparato más del grupo hegemónico y deja de cumplir su función de partido político, es decir, de representar los intereses de un grupo de ciudadanos y defenderlos cuando se conquiste el poder.

Por el contrario, el PRI en su conjunto debe acatar la palabra del Jefe máximo que al mismo tiempo es Jefe de Estado y jefe de Gobierno.

En términos de la continuidad, esta facultad garantiza la disciplina entre los miembros del PRI que aún cuando no afilia a toda la sociedad, sí mantiene relaciones con los grupos políticos más organizados.

Por último, habría que mencionar una de las facultades que desarrolló el Presidente de la República en los sexenios que siguieron al del general Lázaro Cárdenas: la posibilidad de influir directamente en la elección de su sucesor. Aunque cada vez se hace más evidente la forma como los presidentes eligen al candidato del PRI para el siguiente período presidencial, existen muchos tabúes sobre los mecanismos reales de la elección. Lo cierto es que en términos de la continuidad, esta facultad del Presidente permitió que no se diera un rompimiento político serio entre un sexenio y otro, y que en mayor o menor medida se realizaran acuerdos, tácitos o explícitos, para facilitar la transición del poder.

b) El partido oficial. Cuando el general Plutarco Elías Calles inició en 1928 el proceso de construcción del Partido Nacional Revolucionario, no sólo surgía un partido político, se institucionalizaban las formas como el Estado que heredaba la

Revolución se relacionaría con las bases sociales que le dieron vida.

El Partido fue desde entonces una de las bases más sólidas del Estado contemporáneo.

Las funciones que ha desempeñado el Partido en el poder desde 1929 son múltiples y contradictorias, pero precisamente en sus contradicciones radica su capacidad para conservar el poder.

Como partido político, el PRI cumple con las funciones normales de toda institución de este tipo. Participa en las elecciones nombrando candidatos a todos los puestos de elección popular que están asignados en la Constitución; realiza campañas políticas; moviliza a sus afiliados; y, sobre todo, conserva el poder. Pero difícilmente el PRI hubiera tenido el éxito electoral y político que la historia constata si no desempeñara también un papel como aparato del grupo gobernante, en un país en el cual sus bases sociales revolucionarias estaban constituidas por un campesinado analfabeto y de cultura tradicional arcaica, y para las cuales el Estado representativo no tenía ninguna significación. Sólo manejando a las bases sociales desde el poder estatal, el PRI ha logrado mantener hasta la fecha una relación estable entre las bases sociales y los gobiernos de la Revolución.

Desde su formación como Partido Revolucionario, el grado de representatividad que lograron los primeros dirigentes fue muy cuestionable; la crisis de 1933 en la Segunda Convención Nacional del PNR lo muestra claramente. Cuando este partido se transformó en partido de la Revolución Mexicana y después en Partido Revolucionario Institucional, se realizaron las reformas necesarias para construir una estructura organizativa cada vez más vertical, hasta concentrar la dirección del Partido en el Comité Ejecutivo Nacional y en especial en el Presidente del Partido. Como consecuencia de lo anterior, la relación bases-partido-poder sufre una transformación cualitativa en la que cada vez más se separan las bases de la posibilidad de influir en los programas de gobierno que seguirán sus candidatos triunfantes. En este sentido, el Partido actúa como un instituto de poder al servicio del gobierno ya que, recordemos, el Presidente es el Jefe Supremo del PRI.

Sin embargo, una de las funciones primordiales del PRI en términos de la continuidad es la de fungir como espacio político en el que negocian permanentemente las relaciones con los sectores sociales que tienen mayor urgencia política en el país. Tanto el movimiento obrero como los campesinos organizados y los miembros de la burocracia gubernamental, regulan sus actividades, presiones y apoyos a través del Partido. Ejemplo claro de esto es el movimiento obrero conducido por Fidel Velázquez. Nadie duda de que la CTM podría presionar fuertemente al gobierno con amenazas de huelga general o con su simple separación del PRI.

Sin embargo, la capacidad negociadora del Estado y el papel del PRI como elemento de conciliación, permiten mantener un tipo de relaciones entre los obreros y Estado que garantice la estabilidad política de los regímenes.

En términos de la continuidad, el PRI garantiza que las transiciones de poder sean pacíficas y que los gobernantes guarden un mínimo de legitimidad ante la población. En términos de la estabilidad, el PRI actúa como catalizador de las tensiones entre los grupos más organizados del país pues, aun cuando el Partido no afilia a la mayoría de la población, sí aglutina a los sectores más organizados.

Para ahondar más en la "naturaleza" del PRI y del sistema político mexicano, apuntamos a continuación la concepción que de este partido, plantea Giovanni Sartori. Para nosotros, esa concepción es válida hasta mediados de la década de los ochenta, y consideramos que, precisamente, esa "naturaleza" del partido fue totalmente sellada durante el sexenio del Presidente Miguel Alemán.

Tras aceptar que la gran mayoría de las tipologías políticas basadas en el número de partidos existentes en una nación contenían serias limitaciones, Giovanni Sartori propone su recuperación, pero a partir de criterios explícitos para tomar en

cuenta el número de partidos y de formas "inteligentes" de contarlos (Sartori, 1980: 154-159). A partir de esta proposición, elabora una nueva tipología, basada en la diferenciación entre los sistemas competitivos y los no-competitivos. Entre los primeros menciona al pluralismo polarizado, al pluralismo moderado, al bipartidismo y a los sistemas de partido preponderante. Entre los segundos menciona a los sistemas de partido único y a los de partido hegemónico.

Sartori ubica el caso mexicano en esta segunda categoría (no-competitivos). De acuerdo con él: "Un sistema es no competitivo si, y sólo si, no permite elecciones disputadas. Claro que lo que lo que importa es la norma real, no la legal. Cualesquiera sean las normas legales, la competencia termina, y la no competencia comienza, cuando a los adversarios y a los oponentes se les priva de la igualdad de derechos, se les ponen impedimentos, se les amenaza, se les aterroriza o incluso se les sanciona por atreverse a decir lo que piensan" (Sartori, 1980: 260).

En este marco, Sartori define tres tipos de sistemas unipartidistas: 1. totalitario; 2. autoritario, y 3. pragmático. Para establecer la diferencia entre ellos, el autor utiliza cinco criterios básicos. El papel de la ideología, tanto al interior del partido único como hacia su entorno; el papel de la coacción ejercida por el régimen; la política seguida hacia los grupos

opositores; el nivel de independencia de grupos no específicamente políticos; y la arbitrariedad en el uso del poder.

En el esquema de los sistemas de partido único, la ideología pasa de fuerte a débil, y muy débil, cuando el sistema va del unipartidismo totalitario, al autoritario y al pragmático. Igualmente, la política hacia los grupos opositores, va de destructora, a excluyente y absorbente.

Pero Sartori también establece diferencias entre los sistemas de partidos hegemónicos. Habla del partido hegemónico-ideológico y del partido hegemónico-pragmático. Estos dos tipos de sistemas tienen en común el hecho de que se "centran en un partido y, sin embargo, exhiben una periferia de pequeños partidos secundarios y, de hecho de 'segunda clase' (Sartori, 1980: 277). En este sentido, los partidos hegemónicos no permiten la competencia por el poder, permiten la existencia de otros partidos siempre y cuando sean de segunda clase. "No sólo no se produce de hecho la alternación; no puede ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la posibilidad de una rotación en el poder"", dice el autor (Sartori, 1980: 278). Es por ello, que no se trata de sistemas multipartidistas, aún cuando lo aparenten, sino de sistemas de "dos niveles en el cual un partido tolera y asigna a su discreción una fracción de su poder a grupos políticos subordinados" (Sartori, 1980: 279).

"Mientras Polonia nos brinda el prototipo del partido hegemónico ideológico, México se destaca, por ahora, como caso muy claro y bien establecido de partido hegemónico-pragmático", dice Sartori. La diferenciación en este caso está dada fundamentalmente por dos criterios: el papel de la ideología y la política hacia los grupos opositores.

El partido hegemónico toleraba la existencia de tres partidos secundarios que nunca tuvieron posibilidades reales de contender por el poder, aunque, tras la reforma constitucional de 1963, con la creación de la figura de diputados de partido, se empezaron a asignar pequeñas cuotas de representación parlamentaria a ese tipo de partidos. Por otra parte, la ideología de la "revolución mexicana" ha resultado un marco doctrinal tan amplio, que no ha servido como elemento cohesionador de la política del partido hegemónico. También, el régimen mexicano ha seguido una consistente política de absorción tanto de las demandas como de los dirigentes de los grupos opositores.

c) La capacidad conciliadora en el Estado. Como se dijo al principio, la hegemonía dentro de un Estado depende más del equilibrio entre los sectores sociales que dirige, que del uso de la fuerza y la coerción. La razón de esto radica en el valor que las sociedades modernas han otorgado al bienestar social, la seguridad y la tranquilidad política. Puede decirse que estos elementos han facilitado la permanencia de ciertos regímenes, aun cuando las condiciones económicas efecten seriamente a la población.

En México, el Estado cuenta con instituciones encaminadas a evitar la polarización entre los distintos intereses sociales que pudieran causar conflictos desestabilizadores en la sociedad. Desde la Constitución hasta el Ejército mismo, existen múltiples recursos para negociar, conciliar o simplemente dialogar, con los grupos representativos que pudieran significar una oposición al régimen o al Estado mismo.

En la Constitución de 1917 se incluyeron, después de serias discusiones, las demandas sociales defendidas por los sectores que habían luchado en la revolución. Además, se adelantaron legislaciones para mantener una relación estable entre los trabajadores y el Estado. Tal fue el sentido de los artículos 27 y 123 constitucionales.

Como marco jurídico, la Constitución de 1917 facultó a los gobernantes para intervenir tutelarmente en defensa de uno u otro sector social, según el carácter de la problemática que se presentara y de acuerdo con la coyuntura política que viviera el país. Así, la aplicación de los artículos mencionados tuvo mayor auge durante el periodo 1934-1940, en la medida en que confluyeron las luchas obreras y campesinas con el proyecto nacionalista del general Lázaro Cárdenas. De esta manera, la defensa de los derechos obreros y el reparto agrario, se constituyeron en armas para la negociación política entre el

capital y el trabajo, mientras que el poder del Estado condujo los destinos del país hacia la consolidación del capitalismo.

Paralelamente, los márgenes de conciliación del Estado mexicano se amplían considerablemente a partir de las garantías individuales que también incluye la Constitución, el gobierno ha sido facultado para intervenir y evitar conflictos que pudieran atentar contra la vida ciudadana. Este es el origen de las acciones represivas que dirige el Estado en momentos determinados. En todo caso, pero no sin dificultades, el objetivo se ha cumplido. Por un medio o por otro se evita la polarización de un conflicto que pudiera tener mayores consecuencias. Una de las grandes habilidades del Estado mexicano ha sido la de administrar la represión para consolidar su poder y utilizarla como medio de conciliación política.

Un ejemplo que ilustra claramente lo anterior es la represión al movimiento estudiantil de 1968. Aun cuando la sociedad en general reprobó las acciones del 2 de octubre, el resultado de la matanza evitó que se agudizara el clima de inestabilidad política provocado por los estudiantes; se conservó la unidad gubernamental y se contuvieron las presiones de los sectores empresariales del país que empezaron a mostrar su desconfianza

ante al gobierno diazordacista. Lo que pudo ser un movimiento que trastocara bases importantes del poder político en México, fue reducido por la represión a una gran lección para el grupo gobernante: había que flexibilizar las relaciones políticas en México.

Ahora bien, el mismo ejemplo ilustra sobre una de las cualidades de los grupos gobernantes que han dirigido al país desde 1940 a la fecha: su capacidad para vislumbrar las necesidades de cambio del Estado para conservar el poder.

Podría decirse que el Estado de 1940 se ha transformado constantemente en aras de su adecuación a las nuevas realidades sociopolíticas que implicó la modernización y para evitar el conflicto social. El crecimiento de la sociedad, la evolución de las clases sociales, el surgimiento de nuevas organizaciones políticas de oposición, etcétera, han sido los generadores de las transformaciones realizadas en el aparato estatal.

Consecuentemente, las formas específicas como se desarrollan las relaciones políticas del país han cambiado sustancialmente.

En términos de la conciliación, las constantes reformas del Estado, originadas en el permanente conflicto social que caracteriza a nuestras sociedades, ha permitido a los grupos en el poder mantener la estructura fundamental del Estado mexicano, pero matizándolo con innovaciones que perpetúan su hegemonía.

Así los factores de la estabilidad política en México operan interrelacionados y han mostrado su eficacia a lo largo de cuarenta años.

Los factores del crecimiento económico

Otro de los componentes de la continuidad política del Estado mexicano es el crecimiento económico sostenido que ha caracterizado a México durante los años posrevolucionarios.

Indudablemente la estabilidad política fue un elemento fundamental para garantizar el crecimiento económico del país. Sin embargo, la estabilidad fue constantemente reforzada por los triunfos económicos convertidos en desarrollo con la incorporación permanente de la población a la estructura productiva moderna y a los servicios de bienestar social que cada gobierno fue estableciendo para los sectores trabajadores del país.

El factor principal que permitió este tipo de crecimiento económico fue el rectorado de la economía por el Estado. Quizá este sea uno de los factores que más particularizan a México ante otras naciones.

Fue en la Constitución de 1917 en donde se consagró la participación que tendría el Estado en la economía. Si bien se

planteaba la propiedad privada como el núcleo fundamental de las relaciones de producción en el país, el Artículo 27 Constitucional se refería a los recursos del país (territorio, subsuelo y aguas) como propiedad de la Nación, es decir, como propiedad social. Esta es la fundamentación del ejido en México pero también es la base de la participación del Estado en la economía. Sólo el Estado, como institución rectora de la sociedad, podría administrar los bienes de la sociedad.

Los alcances de esta concepción fueron múltiples. En primer lugar, se contaba con argumentos legales para desplazar las compañías extranjeras de los sectores básicos de la economía. El presidente Cárdenas utilizó esta facultad en la expropiación del petróleo, en la nacionalización de los ferrocarriles y en el contenido global de su política nacionalista.

En segundo lugar, la participación del Estado en la economía permitió que los gobiernos posrevolucionarios desarrollaran actividades económicas en aquellos sectores donde la iniciativa privada no había sido capaz de hacerlo. Tales fueron las grandes obras de infraestructura, la minería en general, la electricidad, etc. Sintomáticamente el Estado ocupó el control de los puntos claves de la economía nacional.

En tercer lugar, en la medida en que el Estado asumió posiciones cada vez más importantes en la producción nacional, desarrolló la

capacidad de regir la política económica en su conjunto, expresada en los enfoques que tendría la política fiscal, en el control del circulante y su paridad con las monedas extranjeras, en la implementación de medidas de protección a la industria, etc. De ahí la gran importancia de la participación estatal en la formación de los grandes capitales nacionales.

Ha sido la participación estatal en la economía, una de las bases fundamentales del crecimiento económico y éste, el factor decisivo de la legitimidad. El crecimiento ha permitido mantener abierta la esperanza de los marginales en su eventual incorporación al aparato productivo; ésta sustenta la credibilidad que permite el uso relativamente impune del poder estatal; lo que a su vez, propicia la eficacia de la acción de los aparatos de Estado, particularmente el Partido Revolucionario Institucional.

A continuación, objeto de esta Tesina, presentamos los que consideramos los aportes a ese sistema político y económico nacional que intentamos delinear líneas arriba, por parte del sexenio del Presidente Miguel Alemán:

Para el autor Luis Medina, Miguel Alemán "sobresale en la historia política mexicana contemporánea por ser el primer Presidente que propone un proyecto nacional claro y completo" (Medina, 1982, 1).

El investigador Tzvi Medin coincide con él, al afirmar que "Miguel Alemán llegó al poder con un proyecto nacional sumamente definido"" (Medin, 1990, 172).

Para nosotros, no podría ser de otra manera, pues consideramos que uno de los principales artífices de la política económica y social durante el gobierno del Presidente Manuel Avila Camacho, fue, precisamente Miguel Alemán, en su calidad de secretario de Gobernación.

Esa idea cobra fuerza cuando consideramos que Alemán profundizó e institucionalizó los cambios que tuvieron lugar durante la Presidencia de Avila Camacho, no estando obligado a hacerlo.

Así, uno de los puntos del proyecto de nación que Alemán empezó a impulsar desde sus tiempos de secretario de Gobernación tendía, en una concepción capitalista dependiente, al desarrollo económico del país, vía la industrialización. El otro punto de su proyecto, expresado a lo largo de toda su campaña y en su toma de posesión, era el de lograr la democratización política.

Si bien, la tendencia internacional era el aplauso hacia las victoriosas democracias al término de la Segunda Guerra Mundial, no era por ello obligatorio que en México se iniciaran reformas que ofrecieran, por lo menos, un barniz democrático.

Pero Alemán, al igual que todos los anteriores gobernantes mexicanos posrevolucionarios, tenía que introducir en su discurso la idea de democracia si quería legitimar su gobierno. Más aún, y de ahí que la idea de la democratización fuera un punto de su proyecto, cuando el veracruzano tenía en mente la institucionalización de un programa económico serio y sostenido, sin precedentes en la historia posrevolucionaria.

Un programa económico serio y sostenido corre el riesgo de fracasar rotundamente, sin el respaldo de una mínima legitimidad democrática.

Tuvo éxito parcial el primer punto del proyecto, pero no el que se refiere al de la democratización política.

De acuerdo con Lorenzo Meyer y José Luis Reyna, "la necesidad de apoyar una acumulación rápida de capital a través de un tipo de industrialización, basada en la sustitución de importaciones, llevó a que las políticas de gasto del gobierno dieran preferencia a las demandas y necesidades del capital sobre las del resto de los sectores sociales, excluida la élite política. Así, la subordinación política de los sectores populares vino a ser condición necesaria del proyecto económico que se instauraba". (Meyer, 1989, 307)

Pero si no se logró la democratización, se avanzó, como nunca, en un proceso de institucionalización.

Si bien, anteriores gobernantes habían ido neutralizando progresivamente el poder político de los generales "todos ellos habían sido militares y, más aún, se habían desempeñado previamente a su ascenso a la presidencia como secretarios de Defensa. En gran medida eran vistos por los generales como los representantes del ejército que se habían elevado al máximo grado posible. A sus ojos, la presidencia venía a ser el máximo grado en la jerarquía militar" (Medin, 1990, 62).

Esa percepción de los militares y lo ocurrido en las elecciones de 1940 (en que, si bien el ejército como institución dio su respaldo al candidato oficial, un sector considerable de jefes y oficiales y una mayor proporción de la tropa apoyaban la candidatura del general Juan Andrew Almazán), mostraban que aún el ejército no estaba totalmente supeditado al poder presidencial.

"La supeditación completa del ejército la consumó el Presidente Alemán, quien inició la política de debilitamiento institucional numerosos ascensos rápidos en pago a servicios al grupo gobernante, canonjías, mayor intromisión gubernamental en los mandos y la creación de otras fuerzas competitivas como el cuerpo de guardias presidenciales y la policía federal de seguridad que quedó al mando de un coronel del ejército y contó con el apoyo de oficiales del Colegio Militar.

El mismo Estado Mayor Presidencial que Avila Camacho había creado en la situación anterior de Guerra se convirtió en una nueva fuerza competitiva frente al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional"" (Camacho Solís, 1978).

Pero, en materia de institucionalización se avanzó en otros sentidos. En el primer capítulo de este texto se mencionan serios problemas propiciados por lo elemental e insuficiente de la añeja Ley Electoral de 1918. La "rudimentariedad" de la Ley, no sólo propiciaba el fraude, sino que no ponía un freno a la formación de efímeros partidos electorales como el vasconcelista, el almazanista o el de Padilla, que tenían la expresa intención de competir y lograr tomar realmente el poder político, y por ello siempre, al cabo de la derrota a manos del partido oficial, podían considerar la posibilidad de sobreponerse a la usurpación por medio de la violencia.

Por medio de la Ley Electoral de 1946, esa situación cambio, porque se logró la institucionalización de la oposición política (véase, el tercer capítulo de este trabajo).

Con la tercera reforma del PRI desaparece, en el terreno doctrinario, el reconocimiento a la existencia de la lucha de clases y con ello se borra cualquier frase de tinte socialista.

Y, si bien, en su declaración de principios el PRI no abandonó su compromiso con los intereses de los sectores populares, sí volvió a sus orígenes de 1929 al poner mayor énfasis en la conciliación entre las clases. La meta socialista fue abandonada por el discurso oficial y, en cambio, el desarrollo económico por la vía del apoyo al capital se transformó en el prerrequisito para el avance en el camino de la "justicia social".

Tan importante como el cambio de lenguaje en el partido fue el cambio de los procesos internos, que llevó a concentrar un mayor poder en manos de los órganos centrales del PRI (cuyos integrantes lo eran, en la práctica, por una decisión del presidente).

Un mayor poder en manos de los órganos centrales y una "redistribución de las fuerzas del interior del partido, con la exclusión de las fuerzas sociales que habían ocupado las organizaciones del régimen. Primero (1946) en contra de los sectores al instaurar la votación individual para la selección de candidatos y luego, cuando los sectores ya habían excluido a la oposición (1950), a favor de los sectores para facilitar su cohesión interna ofreciendo a sus dirigentes la posibilidad de premiar la lealtad y canalizar las ambiciones hacia las posiciones políticas que las candidaturas del PRI garantizaban. El resultado final fue que redistribuyó entre todos el poder debilitando a todos sus integrantes en favor de la clase política que terminaría por abandonar el partido para ocupar la cada vez mayor y más benévola administración pública".

Consideramos así que la tercera reforma del partido correspondió, sobre todo, al proyecto político y económico del Presidente Alemán. Pero ello no es lo más importante, lo básico es que avanzó, como nunca, en un proceso de institucionalización. Logró, nada menos, que la institucionalización del ejército y de la oposición política. Logró también la institucionalización de un modelo de desarrollo económico (de sustitución de importaciones) que prevaleció, por lo menos, treinta años. La forma de distribución partidaria del poder (en el PRI) se mantuvo también unos treinta años.

PROLIFERACIÓN

RODRÍGUEZ, Juan, Gobernación de la sombra de la Revolución mexicana, México, ERA, 1989, pp. 200.

ROMERO, Juan Manuel, La cuarta reforma del PRI en Veleta (México), México, ERA, 1978, pp. 11.

SARIN, Américo, La Política de Masas del Cardenismo, México, ERA, pp. 210.

TERRELL, Ricardo, et al. México: la Discuta con la Nación. Perspectivas y visiones del Desarrollo, México, Siglo XXI, 1980, 149.

TERRELL, Ricardo et al. Atlas Histórico de México, ed. Siglo XXI, 1980, p. 246.

TERRELL, Ricardo et al. México: un siglo de 1945, pp. 7-10.

TERRELL, Ricardo, et al. El Estado y los partidos políticos en México, México, ERA, 1980, pp. 257.

TERRELL, Ricardo, et al. La Democracia en México, ERA, 1980, 334.

TERRELL, Ricardo, et al. México: 50 años de historia. De la Unidad Nacional al Desarrollo (1940-1970) en América Latina: Historia de medio siglo, Tomo III, México, Siglo XXI editores, 1980, pp. 500.

LIFEZ VILLAFORTE, M., La fundación del sistema político mexicano. Siglo XXI Editores, México, 1966.

MEDIN, Ivan. El Sexenio Alemánista. México. Era. 1990. pp. 207.

MEDINA, Luis. Historia de la Revolución Mexicana 1940-1957. Civilismo y modernización del autoritarismo. El Colegio de México pp. 7-8. 1982

MEYER, Lorenzo et al. Los sistemas políticos en América Latina. Siglo XXI editores y universidades de las Naciones Unidas. 1989. pp. 170.

MOLINA ROSALES, Juan. El tiempo de la Legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México. Cal y Arena, 1971. pp. 155.

PAUL BULIO, Francisco José. "Legislación y proceso político, 1917-1982" en Las elecciones en México. Evolución y perspectivas. México, Siglo XXI, 1985)
 PÉZ, Octavio. México en la Obra de Octavio Paz. México, FCE, 1985.

REIDING, Alan, VECINOS DISTANTES. México, Joaquín Mortiz-Planeta, 1985, 431.

RIVERA, Martha. "La política económica durante la Guerra" en Entre la Guerra y la Estabilidad Política. El México de los 40. México, Grijalbo-CONACULTA, 1990.

VARIOS, Actos Constitutivos y Documentos Básicos. FNR-PRM-PRI. México, PRI, 1990. pp. 494.

Nacional Financiera. La Economía Mexicana en Cifras. Mexico. Hafinsa. 1974. 106.

RODRIGUEZ, Abraham et al. La Sucesión Presidencial en 1993. Mexico. UNAM. 1991. 426.

SARTORI, Giovanni. Partidos y sistemas de partidos. ciencia política. Madrid. 1990.

VARIOS. Estadísticas Históricas de Mexico. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 1990. Tomo I pag. 33. pp. 504

WEBER, Max. Economía y Sociedad. Mexico. FCE. 1984 pp. 1237

INDICE GENERAL

Introducción.....	3
Breve Historia del Partido.....	7
México, 1945: Retrato Hablado.....	14
Los Pasos de Alemán.....	30
La Tercera Reforma.....	39
Conclusiones.....	54
Bibliografía.....	81